

■ MÁS QUE UN BANCO: 40 AÑOS DEL BID

■ COMPUTADORAS Y GANGAS

BID AMÉRICA

Revista del Banco Interamericano de Desarrollo

Noviembre-Diciembre 1999



Confíe en mí

René Hernández Valiente,
magistrado de la Corte
Suprema de El Salvador

Anatomía de una reforma judicial

PUNTO DE VISTA

1 Lecciones de la batalla por la reforma judicial

ENFOQUE

2 "Más que un banco"

El BID examina 40 años de labor por el desarrollo

NOTICIAS

6 Menos demora, más memoria

8 Cornucopia de arroz y frijoles

INFORME ESPECIAL

9 Reforma judicial

¿Puede restaurarse la fe?
La experiencia salvadoreña

EL BANCO EN ACCIÓN

21 Proyectos locales con gestión local

IDEARIO

22 Costos y remedios de la corrupción



El presidente del BID, Felipe Herrera, y el presidente estadounidense, John F. Kennedy, firman un acuerdo en 1961. Ver pág. 2.

CIFRAS QUE HABLAN

23 El legado del "Y2K"

EXPRESIONES

24 Estilo antiguo en el nuevo mundo

NUEVOS PROYECTOS

26 Astillero giratorio

26 Alerta: El Niño

26 El patrimonio urbano de Brasil

GACETA

28 Mitch y la integración

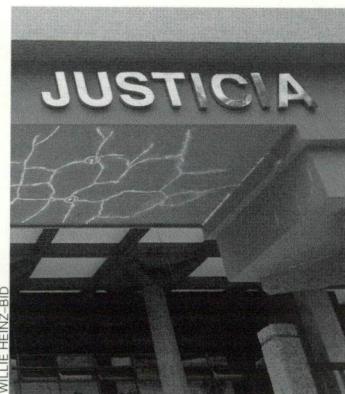
PROTAGONISTA

29 De la favela a los recintos del poder

PORTADA

Desde la corte. Cuando se trata de arreglar un sistema judicial, los temas del acceso y la credibilidad están íntimamente vinculados, afirma René Hernández Valiente. "No tiene sentido brindarle acceso a la gente a un sistema que no funciona y en el que no creen". La reforma judicial en El Salvador tiene muchas dimensiones pero en última instancia es una lucha por confianza y credibilidad. Informe en la página 9.

—Foto de Willie Heinz, BID



LIBRETA DE APUNTES

Bienvenido, 6.000.000.000

EL 12 DE OCTUBRE ARRIBÓ al mundo el habitante número 6.000.000.000. La criatura fue recibida con el típico coro de comentarios que ha provocado el tema de la población desde que el clérigo y economista británico Thomas Malthus formulara sus apocalípticas predicciones a fines del siglo XVIII.

La facción que proclama "cuantos más, mejor" reiteró su inmutable confianza en el ingenio humano para desactivar la llamada "bomba de la sobrepoblación". Desde el bando contrario, se apuntó el hecho de que tan sólo en 12 años la población mundial ha aumentado en 1.000 millones de personas. Según un reciente informe de la Universidad de Cornell, más de la mitad de los seres humanos sufre malnutrición y pobreza. El promedio de tierras aptas para cultivo per cápita alcanza a

sólo la mitad de lo necesario para producir una buena dieta y la disponibilidad de agua potable per cápita cayó 60 por ciento entre 1960 y 1997.

Mientras ambos bandos discuten, los números cambian. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), la tasa de crecimiento de la población mundial está bajando porque la gente opta por tener menos niños. En los países en vías de desarrollo, los índices de fertilidad han caído de más de seis hijos por cada mujer en 1950 a menos de tres en la actualidad. Esto es el resultado de millones de decisiones, particularmente de las mujeres, para quienes tener menos niños es causa y consecuencia de poder ir a la escuela, conseguir empleo y acceder a servicios de salud.

México ha experimentado una notable reducción en su

índice de fertilidad. Hace una generación el gobierno reemplazó su política de promover las grandes proles con programas voluntarios de planificación familiar y una enmienda constitucional que consagra el derecho de cada persona a determinar el tamaño de su familia. Esto, combinado con la creciente industrialización, la emigración a áreas urbanas, más educación y mayores oportunidades económicas, redujo su índice de fertilidad a la mitad en 15 años.

Aún así, la población mexicana podría aumentar en casi 50 por ciento para el año 2030. En otros países donde no se han implementado políticas similares, la población sigue creciendo sin pausa. Según UNFPA, todavía se agregan 78 millones de personas al año al total mundial, y 97 por ciento del incremento ocurre en los países más pobres.

BID AMÉRICA Volumen 26 No. 11-12

EDITOR: Roger Hamilton
EDITOR ASOCIADO: Paul Constance
EDITOR, EDICIÓN EN ESPAÑOL: Peter Bate
EDITORIA ADJUNTA: Claudia Estrada
EDITORIA ON-LINE: Iris del Carpio
DISEÑADORA: Giselle Goicochea
CORRESPONSAL: David Mangurian
FOTOGRAFO: Willie Heinz

IDBAmérica cubre las tendencias del desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe y las actividades del Banco Interamericano de Desarrollo. Se publica 10 veces al año en castellano e inglés.

Las versiones electrónicas editadas en inglés, castellano, francés y portugués, aparecen en la dirección de Internet <http://www.iadb.org/exr/idb/indexesp.htm>. Todo el material allí incluido puede ser reproducido si se lo atribuye a IDBAmérica.

¿Comentarios? Por favor envíelos a nuestra sección editorial, ya sea por correo electrónico a editor@iadb.org o a la dirección que aparece al pie de esta columna.

Pueden solicitarse suscripciones gratuitas a IDBAmérica a la librería del BID: IDB Bookstore E-0105, Office of External Relations, 1300 New York Ave, N.W., Washington, D.C., 20577, USA. Tel.: (202) 623-1753, fax (202) 623-1709. Correo electrónico: ids-books@iadb.org.

La batalla de la reforma judicial

“Hemos despertado de la pesadilla de apatía, indiferencia y miedo”

El periodista colombiano Francisco Santos, citado en The Economist, del 30 de octubre, refiriéndose a ¡No más!, un movimiento pacifista que ha movido a millones de colombianos a marchar contra la violencia fratricida en su país.

“La gente está comenzando a entender cómo (las jubilaciones de privilegio) desvían recursos fiscales de otros sectores, como la educación”.

Antonio Kandir, diputado del Partido Socialdemócrata de Brasil, citado en una nota del Financial Times del 28 de octubre sobre el sistema de seguridad social.

“¿Ustedes creen que las mujeres somos invisibles?”

La jefa de gobierno del Distrito Federal de México, Rosario Robles, citada por el Financial Times del 14 de octubre. Robles le había formulado esa misma pregunta un año antes a los concejales capitalinos, algunos de los cuales se oponían a su nombramiento a otro cargo municipal. Más tarde fue electa como sucesora de Cuauhtémoc Cárdenas.

“Argentina anhela más ética, más sinceridad y un estado de derecho”.

Martín Redrado, presidente del centro de estudios Fundación Capital de Buenos Aires, citado en un artículo en el New York Times del 26 de octubre sobre las elecciones presidenciales en Argentina.

“Somos un país alfabetizado, pero no un país educado”

Miguel Gutiérrez, coordinador del proyecto Estado de la Nación en Costa Rica, citado por AFP el 25 de octubre. Gutiérrez argumentaba que los firmes y continuos progresos logrados en el esfuerzo para elevar la tasa de alfabetización en su país no deben eclipsar otros problemas, como el alto nivel de deserción en la enseñanza secundaria.

Por CHRISTINA BIBESHEIMER



EN TODA AMÉRICA Latina y el Caribe, la reforma del sistema judicial se ha convertido en el tema del momento. Pero es más que una moda; es un esfuerzo indispensable para establecer el estado de derecho y consolidar el sistema democrático. Esto, a su vez, es fundamental para el funcionamiento eficiente de los mercados y el crecimiento económico con equidad. Sin estado de derecho no puede existir un estado eficaz; sin un estado eficaz no puede haber un mercado eficiente y sin mercado eficiente no puede lograrse un crecimiento sostenido y equitativo. Por todas esas razones, la reforma judicial se ha convertido en un tema crucial para el desarrollo.

Los latinoamericanos esperan ahora que sus sistemas judiciales contribuyan a frenar el delito y la violencia, garanticen los derechos humanos y civiles, protejan la propiedad y obliguen al cumplimiento de contratos comerciales. Además, los ciudadanos no son los únicos que están recurriendo a las cortes de sus países. Tras la ola de inversiones extranjeras, cada día más litigantes foráneos ponen a prueba las garantías legales de la región.

Desdichadamente, los sistemas judiciales de muchos países latinoamericanos no han podido responder a esa demanda sin precedentes de servicios. Por ello, numerosos gobiernos están tratando de reformar sus sistemas judiciales.

Este número de BID-América ausculta el proceso de reforma judicial en El Salvador, donde tras más de una década de esfuerzos comienza a haber resultados.

La reforma salvadoreña es una de las más amplias emprendidas en América Latina. El país centroamericano ha

renovado sus códigos en materia penal, familiar y de menores. Asimismo, ha modificado sus procedimientos, reemplazando los escritos por los juicios orales en donde preponderan los fiscales y los defensores. Además, El Salvador ha tomado medidas decisivas para asegurar la independencia de los jueces y mejorar la capacidad profesional de los funcionarios judiciales.

Como demuestra el informe especial de este número, la experiencia salvadoreña prueba que hasta un país pequeño con un poder judicial muy débil puede hacer enormes progresos en poco tiempo. Muestra también que las reformas profundas requieren amplio apoyo político y una cuidadosa creación de consenso entre los sectores interesados, dentro y fuera del gobierno.

El Salvador nos muestra que una reforma duradera exige importantes inversiones en capacitación, no sólo de los jueces, sino también de fiscales, defensores públicos y abogados que deben aprender a actuar dentro de un nuevo sistema. Esto puede

ser muy caro. El Salvador tuvo apoyo de donantes internacionales que reforzaron los considerables recursos propios que le dedicó su gobierno a la reforma del poder judicial. Recientemente, el BID aprobó un préstamo de 23 millones de dólares para contribuir a financiarla.

Los salvadoreños han demostrado su voluntad de enfrentar problemas enraizados: encararon el tema de la independencia judicial cambiando sus métodos para nombrar y promover jueces y para asignar presupuestos suficientes para el funcionamiento de las cortes.

El Salvador aún enfrenta enormes desafíos. La violencia y el delito alcanzan índices escalofriantes entre sus jóvenes. En gran parte, esta es una secuela de su larga guerra civil; aunque los combatientes abandonaron las armas al implementarse los Acuerdos de Paz de 1993, muchos de ellos se habían formado en la violencia, sin educación u oficio alguno. Por eso, la reforma de la justicia de menores es la esencia del programa judicial. Un proyecto subsecuente apuntalará la prevención del delito. Mediante estas iniciativas, el gobierno salvadoreño procura mejorar la seguridad pública y rehabilitar a los delincuentes menores de edad para que vivan una vida productiva como adultos.

El interés en la reforma judicial sigue aumentando. De hecho, 11 de los países miembros del BID están usando préstamos del Banco para financiar programas en ese sector. Para quienes están emprendiendo esa ardua labor, el esfuerzo pionero de El Salvador para que la justicia funcione debería servir tanto de lección como de inspiración.

—La autora es especialista de la División Estado y Sociedad Civil del BID.



ILUSTRACIÓN DE JORGE ILLIEF

Más que un banco

El BID mira al futuro tras cuatro décadas de labor pionera

Por PETER BATE

SI HUBO ALGUNA VEZ UN MOMENTO definitorio en la vida del Banco Interamericano de Desarrollo, ocurrió en el apogeo de la Guerra Fría, durante una conferencia económica celebrada en agosto de 1961 por la Organización de Estados Americanos en Punta del Este, Uruguay.

El encuentro, realizado un par de meses después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, se disponía a adoptar la Alianza para el Progreso propuesta por el presidente estadounidense John F. Kennedy, un programa dotado de 20.000 millones de dólares que canalizaría financiamiento a largo plazo de Estados Unidos a proyectos para el desarrollo en América Latina.

Ernesto "Che" Guevara, el argentino que entonces presidía el Banco Central de Cuba, le preguntó al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Douglas Dillon, si Cuba estaría incluida en el programa. Dillon replicó que la isla no sería participe dado que no era miembro del BID. La respuesta movió al dirigente revolucionario a lanzar un discurso en el que denominó al Banco como una institución consagrada prin-

cialmente a financiar la construcción de letrinas, burlándose de su apoyo a proyectos de agua corriente y alcantarillado, como su primer préstamo para Perú.

Cuando Guevara terminó su intervención, el presidente fundador del BID, Felipe Herrera, un joven abogado chileno de formación socialista, se puso de pie y caminó hacia la delegación cubana. "Tienes toda la razón", le dijo a Guevara. "Nosotros somos el banco de los baños. También somos el banco del agua pura, el banco que protegerá a los recién nacidos de América Latina y seremos también el banco de la integración económica".

Durante 40 años el BID ha seguido esa senda, ayudando a los países de la región a modernizar sus sociedades y a superar sus legados de pobreza y desigualdad. Esa formidable "deuda social", como señala el presidente del Banco, Enrique V. Iglesias, sigue siendo el mayor desafío de la región.

En la marcha, el Banco, concebido principalmente como un instrumento para la cooperación entre América Latina y Estados Unidos, se ha convertido en una institución internacional con 46 países miembros, inclu-

yendo naciones de Europa y Asia. Su base de recursos ha crecido de 850 millones de dólares a 111.000 millones de dólares y se ha establecido como la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo en la región.

El BID ha demostrado asimismo que estaban equivocados quienes dudaban que una institución financiera controlada por sus propios deudores podía ser sólida y sustentable. Esta singular institución ha mantenido siempre las calificaciones crediticias más altas, un logro que le ha permitido ofrecer a sus prestatarios financiamiento en términos accesibles gracias a que ha podido mantener bajos sus propios costos de fondeo.

Asimismo, el BID abrió nuevas sendas en el financiamiento del desarrollo. Fue la primera institución multilateral en financiar proyectos de carácter social, en ofrecer préstamos directos al sector privado sin garantías estatales, en extender préstamos globales y en apoyar el microcrédito en la región. Financió desde la expansión de la educación superior a la integración económica, incluso grandes proyectos de turismo. Ahora está ayudando a algunos países a cicatrizar las heridas de guerras civiles y disputas fronterizas y alienta a las comunidades a organizarse contra la violencia.

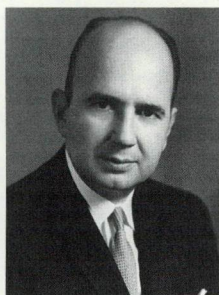
La historia de cómo el BID ha cumplido los mandatos de sus países miembros está sintetizada en un nuevo libro, *Más que un Banco*, escrito por Luciano Tomassini, Oscar Rodríguez Rozic y Jorge Espinoza Carranza, ex funcionarios que conocieron de cerca a los tres presidentes que han encabezado la institución.

Guerra Fría. En más de un sentido, Felipe Herrera fue el hombre apropiado en el mo-



1959

Estados Unidos y 19 países latinoamericanos crean el BID.



1960

El economista chileno Felipe Herrera es electo primer presidente del BID.

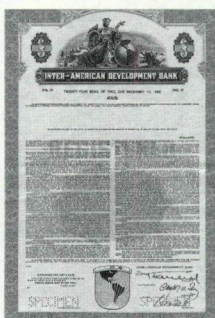
Préstamos del BID

1961

El primer crédito del BID, para agua y saneamiento en Perú, demuestra que los proyectos sociales son viables y establece al BID como pionero del crédito social.

1962

El BID coloca su primera emisión de bonos, por 24 millones de dólares, en Italia. Hacia el final de la década siguiente, los fondos captados en los mercados de capital reemplazarían al capital propio como principal fuente de recursos para préstamos.

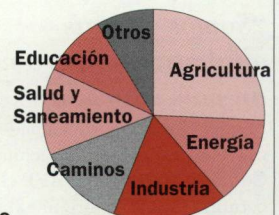


1965

El BID crea el Instituto Latinoamericano para la Integración, cuyos estudios y asesoramiento técnico contribuyen a crear o fortalecer los mercados comunes Centroamericano, Andino, Caribeño y del Mercosur.

1960-69

Préstamos del BID Total: \$3.500 millones



1961 \$290M

1962 \$330M

1963 \$261M

1964 \$347M

1965 \$369M

1966 \$389M

1967 \$474M

1968 \$401M

1969 \$616M

mento justo para el naciente BID. Aunque tenía apenas 38 años cuando fue elegido como el primer presidente del Banco, ya había acumulado una vasta experiencia en la política, la administración pública y las negociaciones internacionales. Comenzó a trabajar en el Banco Central de Chile mientras estudiaba derecho. Como líder del movimiento estudiantil universitario se formó en el socialismo de cuño democrático. A los 26 años fue nombrado abogado del Banco Central. A fin de profundizar sus conocimientos, cursó estudios en la prestigiosa London School of Economics. Luego, durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, llegó a ser gerente general del Banco Central y ministro de hacienda. Así tomó parte en las largas negociaciones en el marco de la OEA que llevaron a la creación del BID, en diciembre de 1959.

El concepto de un banco regional para América Latina se remonta al siglo pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos de la región propusieron la creación de una institución financiera dedicada sólo a sus intereses y separada de las entidades creadas por los acuerdos de Bretton Woods. Los latinoamericanos suponían que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estarían abrumados por la labor de reconstruir las economías de Europa y Asia, devastadas por la reciente guerra. Esperaban que el eventual banco de desarrollo regional sería mayormente financiado y controlado por los mismos países prestatarios. Dadas las perturbadoras señales de conmoción social visibles en varios países latinoamericanos, como la revolución que llevó al poder a Fidel Castro en Cuba, los presidentes estadounidenses Dwight Eisenhower y John F. Kennedy apoyaron prestamente la propuesta de sus vecinos.

Con Herrera al ti-

món, el BID se lanzó a ser "algo más que un banco", como su presidente fundador solía decir. Además de financiar proyectos de infraestructura, un renglón mayor en la cartera de todo banco de desarrollo, el BID se embarcó decididamente en programas sociales, contribuyendo a financiar la expansión del alcantarillado y la provisión de agua corriente, vivienda, salud pública, educación, capacitación laboral, investigación y desarrollo científico y tecnológico. Durante el mandato de Herrera, el Banco comenzó a aceptar como miembros a los nacientes estados del Caribe, a medida que se independizaban del Reino Unido.

Cuando Herrera renunció en 1970, dejó una institución sólidamente establecida que había apoyado a América Latina durante una década en la cual la región registró una tasa promedio de crecimiento económico de 5,5 por ciento anual.

Los gobernadores del BID reemplazaron a Herrera con un hombre de similar currículum, el ex secretario de Hacienda mexicano Antonio Ortiz Mena, quien también participó en las negociaciones previas a la creación del Banco. El nuevo presidente habría de enfrentar el desafío de construir una institución aún más grande, capaz de capear fuertes crisis internacionales.

Durante las dos décadas que siguieron a su creación, el programa de créditos del BID reflejó en gran medida la fe de la región en el modelo de desarrollo concebido por la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) bajo la conducción del economista argentino Raúl Prebisch. Uno de sus principales fundamentos era que el desarrollo no ocurre espontáneamente, como resultado de las fuerzas del mercado. Para que el desarrollo fuese rápido y exitoso, las políticas debían estar enmarcadas en planes a largo pla-

zo creados por entes estatales, responsables a su vez por la infraestructura. En el caso de América Latina, la industrialización debía lograrse a paso acelerado substituyendo importaciones con manufacturas locales. Ese modelo, largamente respaldado por las instituciones financieras basadas en Washington, se mantuvo en vigencia hasta el estallido de la crisis internacional de la deuda externa, a comienzos de la década de 1980. No obstante, antes de ello, el producto bruto de América Latina creció a razón de 5 por ciento anual durante casi dos décadas, sacando de la pobreza a millones de latinoamericanos e introduciéndolos en la economía moderna. Pero algunas de las políticas implementadas desataron altos niveles de inflación que disfrazaban un desorden generalizado en las finanzas públicas e ineficiencias económicas que eventualmente contribuyeron a socavar el modelo.

Pero antes de que eso ocurriera, Ortiz Mena condujo al BID durante una gran expansión en la cual Canadá, Japón, Israel y varias naciones europeas se incorporaron como socios. Los nuevos miembros no sólo fortalecieron la posición financiera del Banco sino que le dieron acceso a un caudal más amplio y diverso de talentos profesionales con experiencia en administración pública, fomento del desarrollo y ayuda internacional. Asimismo, los nuevos socios reflejaban los crecientes vínculos comerciales y económicos de América Latina con otras regiones del mundo.

Durante los 17 años de gestión de Ortiz Mena, el Banco triplicó su capital autorizado a 30.000 millones de dólares y su actividad crediticia se remontó a 3.000 millones de dólares por año. Reflejando las prioridades de las naciones prestatarias, la mayor parte del financiamiento estuvo dedicado durante ese período a proyectos de infraes-

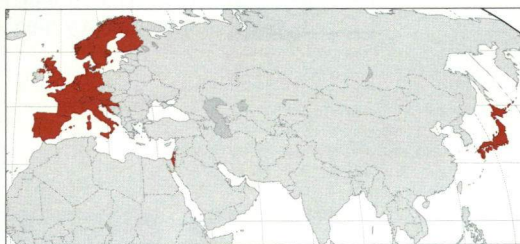


1970

El secretario de Hacienda de México, Antonio Ortiz Mena, es electo presidente del BID.



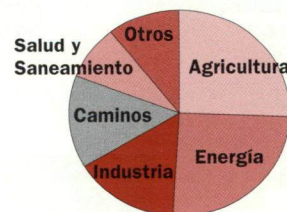
Los créditos del BID han ayudado a los agricultores de la región a producir más.



1976-77

Trece países europeos, Japón e Israel se incorporan al BID. El Banco tiene ahora 17 miembros europeos y asiáticos. Se incorporan también Guyana y Bahamas.

1970-79



Préstamos del BID
Total: \$11.600 millones

1970
\$26M

1971
\$640M

1972
\$774M

1973
\$871M

1974
\$1,1B

1975
\$1,2B

1976
\$1,5B

1977
\$1,6B

1978
\$1,6B

1979
\$1,7B



1972
Canadá se suma al Banco.



1974
El monto anual de créditos supera los \$1.000 millones.



1978

Los gobernadores del BID deciden que la mitad de sus créditos deben ir a sectores pobres.

estructura y del sector productivo. Asimismo, el Banco adoptó formalmente la política de favorecer a las naciones menos desarrolladas, otorgándoles préstamos concesionales a plazos más largos, con tasas de interés preferenciales y menores requisitos de fondos de contrapartida. Algunos de los países prestatarios declinaron voluntariamente a solicitar préstamos concesionales y hasta establecieron fondos especiales para ayudar a los países más pobres.

Ortiz Mena también reflató la idea de crear un banco de inversiones afiliado al BID, un proyecto que había languidecido por años. En 1984, 34 de los países miembros del Banco firmaron las actas para fundar la Corporación Interamericana de Inversiones, que apoyaría el desarrollo de pequeñas y medianas empresas privadas en la región con créditos, inversiones de capital y asesoramiento técnico.

Hacia el fin de la presidencia de Ortiz Mena la región todavía estaba sufriendo los embates de la crisis de la deuda externa desencadenada en 1982 cuando México anunció que no podía cumplir con las obligaciones de su deuda comercial. Después de eso, se secaron las fuentes de crédito comercial para América Latina y disminuyó el financiamiento bilateral y multilateral. La región

padeció más penurias por la caída de los precios de las materias primas y el alza en las tasas de interés internacionales. La prolongada contracción económica que atravesó América Latina sería eventualmente conocida como "la década perdida".

En 1988, la Asamblea de Gobernadores del BID eligió como nuevo presidente al ministro de relaciones exteriores del Uruguay, Enrique V. Iglesias. Ex secretario general de la CEPAL, Iglesias debía enfrentar la tarea de incrementar los recursos del Banco para apoyar la profunda transformación económica que la región habría de emprender en la década siguiente.

Hacia fines de los años ochenta, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe adoptaron políticas orientadas al libre mercado para alcanzar la estabilidad macroeconómica y comenzaron a liberalizar su comercio exterior y la inversión extranjera y a modernizar sus estados. Bajo esas políticas, el sector privado, no el estado, sería el motor del crecimiento económico. Asimismo, la región normalizó sus relaciones con la banca comercial.

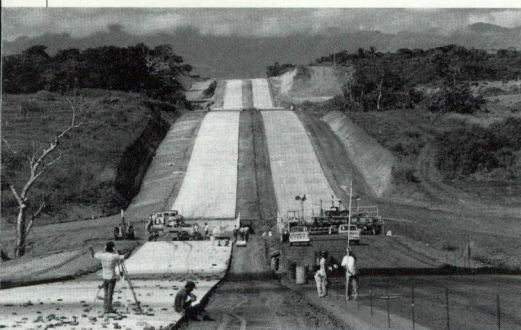
Iglesias encabezó las prolongadas negociaciones con los países miembros que llevaron a nuevos incrementos de capital del BID en 1989 y 1994, de 26.500 millones y 41.000 millones de dólares respectivamente. El primero permitió al Banco conceder grandes préstamos sectoriales en apoyo de una amplia gama de reformas económicas en los países prestatarios. En 1990, uno de los primeros de esos préstamos apuntaló la emblemática privatización de Telmex, la empresa de teléfonos de México. El segundo de esos aumentos de capital condujo a

una completa reorganización interna del BID para permitirle ejecutar su mandato de ayudar a reducir la pobreza, reformar el sector público, preservar el medio ambiente y proteger a los grupos sociales vulnerables.

Durante esta última década el BID se ha embarcado en áreas completamente nuevas como los proyectos para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la reforma de sistemas judiciales, la promoción de la paz entre y dentro de los países de la región y los mecanismos para acercar a los gobiernos y la sociedad civil. El BID se ha tornado también en un incansable defensor de los vínculos económicos entre la cultura y el desarrollo. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en los innovadores proyectos que financia para revitalizar los cascos urbanos de las ciudades coloniales de América Latina. Los programas de pequeña escala para dar crédito a microempresarios, en los que el Banco ha sido pionero, fueron expandidos a niveles nacionales mediante novedosos mecanismos de financiación.

A todo lo largo de este período, el Banco se ha empeñado en acercar nuevos sectores al proceso del desarrollo, financiando programas en donde los beneficiarios participan en la planificación e implementación de proyectos. Ha respaldado creativos programas para ayudar a los pueblos indígenas a preservar su identidad cultural, a los habitantes de barrios marginales a mejorar sus vecindarios y a comunidades rurales a controlar gastos y contratos de obras públicas.

En 1993, un grupo de países miembros del BID fundó el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) para acelerar el desarrollo del sector privado en la región, mejorando



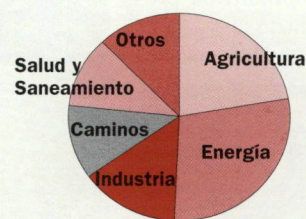
Desde autopistas a caminos rurales, el sector vial ha recibido una gran porción de los créditos del BID.



1986

Se crea la Corporación Interamericana de Inversiones como entidad afiliada del BID para financiar directamente a la pequeña y mediana empresa.

1980-89



Préstamos del BID Total: \$25.900 millones de dólares.

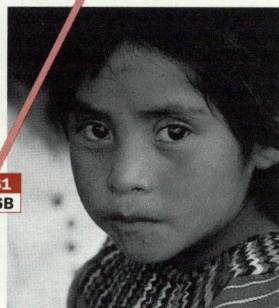
1980
\$2,2B



1980

Suriname y Portugal se suman al BID.

1981
\$1,6B

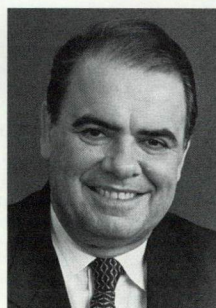


1986

Noruega se incorpora al Banco.

1982

La moratoria mexicana desata una crisis de la deuda externa que sume a la región en una recesión. Los países latinoamericanos tienen dificultades para reunir fondos de contrapartida, se demoran los proyectos que financia el BID.



1988

El canciller uruguayo Enrique V. Iglesias es electo presidente del BID.



1989

Los gobernadores del BID recomiendan aumentar en \$26.500 millones el capital del Banco.

el clima para la inversión privada, los cursos de capacitación para trabajadores y las entidades microfinancieras. Desde entonces, el Fomin ha cumplido un papel instrumental al apoyar a los países de la región que transfieren servicios públicos al sector privado, ayudando a formular, mejorar y fortalecer las políticas y marcos regulatorios.

Durante esta última década el BID ha ayudado asimismo a los países prestatarios a hacer frente a una serie de crisis. La primera fue la tormenta financiera que desató la devaluación del peso mexicano en 1994. Después sobrevino la devastación causada por el fenómeno meteorológico conocido como El Niño y una sucesión de huracanes y terremotos. Más recientemente, la región tuvo que combatir el contagio financiero provocado por el colapso económico de Asia y la moratoria de la deuda de Rusia. En respuesta a esas amenazas "importadas" a la salud económica de la región, el Banco estableció en 1998 una línea crediticia de emergencia que complementa los paquetes financieros proporcionados por el FMI y el Banco Mundial.

En una entrevista incluida en el libro *Más que un Banco*, Iglesias, quien cumple su ter-

cer mandato de cinco años como presidente del BID, examina los logros y traspies de la región durante esta década. Como positivo, apunta que la democracia está ahora firmemente enraizada, la inflación ha sido controlada y las economías están abiertas al comercio y la inversión internacional. Por contrario, Iglesias subraya que todavía persiste la pobreza extrema, que la distribución del ingreso es exageradamente desigual, que el desempleo no amaina y que muchos sectores sociales no se han beneficiado con la recuperación económica.

El punto de partida para enfrentar esos desafíos es hacer más eficientes a las economías de la región. "Al mismo tiempo, debemos conseguir eficiencia social, resolver los problemas sociales mucho más rápidamente que en los últimos años", asegura.



Educación: clave del futuro.



1996

El BID respalda con un préstamo de \$50 millones los acuerdos de paz en Guatemala.

1998 \$10.0B 1999 \$9.9B

1999

El BID aprueba más de \$7.000 millones en préstamos de emergencia económica para Argentina, Brasil y otros países afectados por la volatilidad en los mercados financieros globales.

1990-99



Proyección de préstamos del BID Total: \$66.800 millones



1992

Belice ingresa al BID.

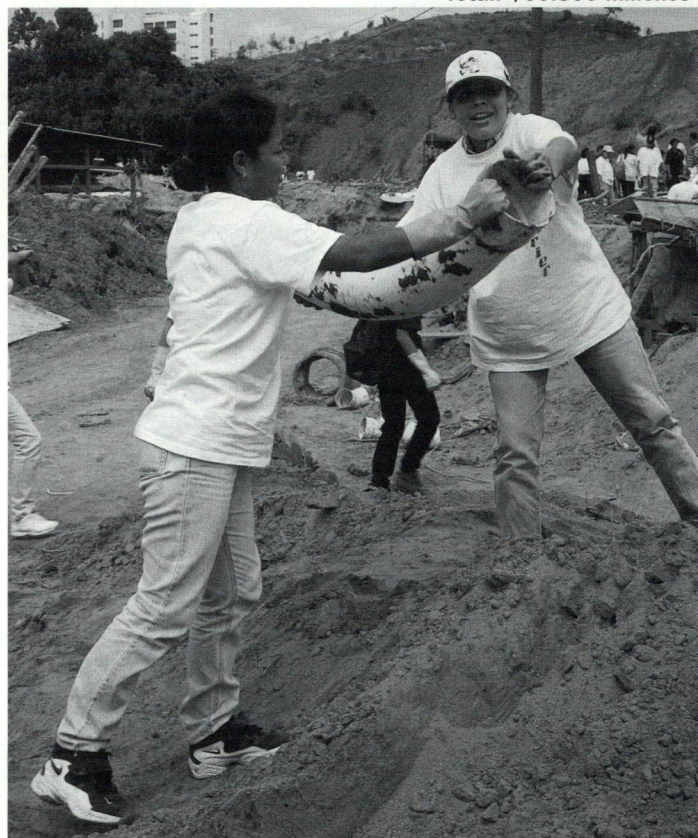
1991 \$5,3B 1992 \$6,0B

1993 \$6,1B

1994 \$5,7B

1998

Estudiantes ayudan a reparar los destrozos del huracán Mitch en Honduras. Lluvias y sequías causadas por El Niño provocaron miles de millones de dólares en daños en caminos y cultivos en Sudamérica. Aumenta la ayuda del BID para desastres.



1993

Se establece el Fondo Multilateral de Inversiones, con la participación de 25 países y un capital de 1.300 millones de dólares, para brindar ayuda financiera y técnica a proyectos que aceleren el desarrollo del sector privado en América Latina y mejoren el clima para la inversión privada.



1994

Los gobernadores del BID recomiendan aumentar en 40.000 millones de dólares el capital del Banco, llevándolo a 101.000 millones de dólares.

La reforma del sector financiero se convierte en una prioridad para la región.



1990

El BID comienza a otorgar préstamos sectoriales para estimular a los países a implementar reformas económicas, modernizar sus instituciones y crear economías aptas para competir en el mercado mundial.



Menos demora, más memoria

Dos sistemas escolares brasileños mejoran sus sistemas para comprar computadoras

Por PAUL CONSTANCE

LAS DEMORAS SON SIEMPRE OFUSCANTES, pero nunca más que cuando se trata de comprar una computadora.

Las computadoras deben ser puestas en uso inmediatamente, antes de que una nueva tecnología destruya su valor y utilidad. Ese irritante aspecto de la era informática puede resultar devastador para grandes organizaciones que hacen sus compras a través de una oficina central, llena de trámites lentos y complicados.

Tales penurias sufría la Secretaría de Estado de Educación (SEED) del estado brasileño de Paraná, que en 1995 adquirió computadoras para 1.300 escuelas a través de un proceso centralizado de compras. Por distintas razones burocráticas y administrativas, las computadoras llegaron a las escuelas recién en 1997.

Ese traspíe sirvió para fortalecer la posición de autoridades estatales y de la SEED que querían descentralizar muchos aspectos de la administración pública. Algunos de esos funcionarios llegaron a sugerir que si cada escuela tuviese autonomía para comprar sus propias computadoras podrían ser más eficaces en la búsqueda de equipos adecuados y en conseguir una entrega más rápida. Otros exhortaron a que los padres de los alumnos tomaran parte en el proceso de adquisición.

“La idea era que si las escuelas y las asociaciones de padres y maestros lograban una mayor participación, se sentirían más dueños del equipo y lo cuidarían mejor”, explica Richard Pelczar, quien por ese entonces era un especialista del BID en desarrollo social basado en Brasil.

En el verano de 1998, las autoridades de la SEED consiguieron una oportunidad de

poner a prueba sus teorías. Como parte de un programa apoyado por el BID para mejorar el sistema de enseñanza secundaria de Paraná mediante una gestión más vigorosa en el ámbito local, regional y estatal, la SEED se aprestaba a gastar 12 millones de dólares en computadoras y accesorios para administradores de escuelas. En lugar de colocar una sola orden por medio de una oficina de compras en el ámbito estatal, los funcionarios de la SEED dividieron la partida y le dieron a cada escuela una parte proporcional.

Pero eso sólo resolvió una parte del problema. Las escuelas están dispersas en una vasta área, y la mayoría no tiene un distribuidor de computadoras cerca, ni hablar de varios para fomentar la competencia en precios. Más aún, existían pocos incentivos para que los proveedores enviaran un representante a cada escuela en procura de una sola venta por unos miles de dólares.

Feria de computadoras. Para superar esos obstáculos, las autoridades de la SEED decidieron convocar un encuentro de representantes de escuelas y de proveedores. Las escuelas tendrían la ventaja de tener más opciones y competencia en precios, mientras que los proveedores podrían llegar a un mercado más significativo en un solo lugar. Funcionarios del área de educación en el estado de Minas Gerais han usado ese concepto de “ferias competitivas” con gran éxito, permitiendo a las escuelas participantes comprar hasta 20 millones de dólares en material docente y equipos a muy buenos precios en el marco de un proyecto financiado por el Banco Mundial. Pelczar cuenta que la SEED contrató a consultores de Minas Gerais para que ayudaran a adaptar en Paraná el concepto de la feria competitiva.



AGENCIA ESTADO

NEGOCIADORES: Las escuelas locales sumaron fuerzas para hacer las mejores compras posibles de computadoras. Al mismo tiempo, tuvieron oportunidad de ejercer autonomía financiera.

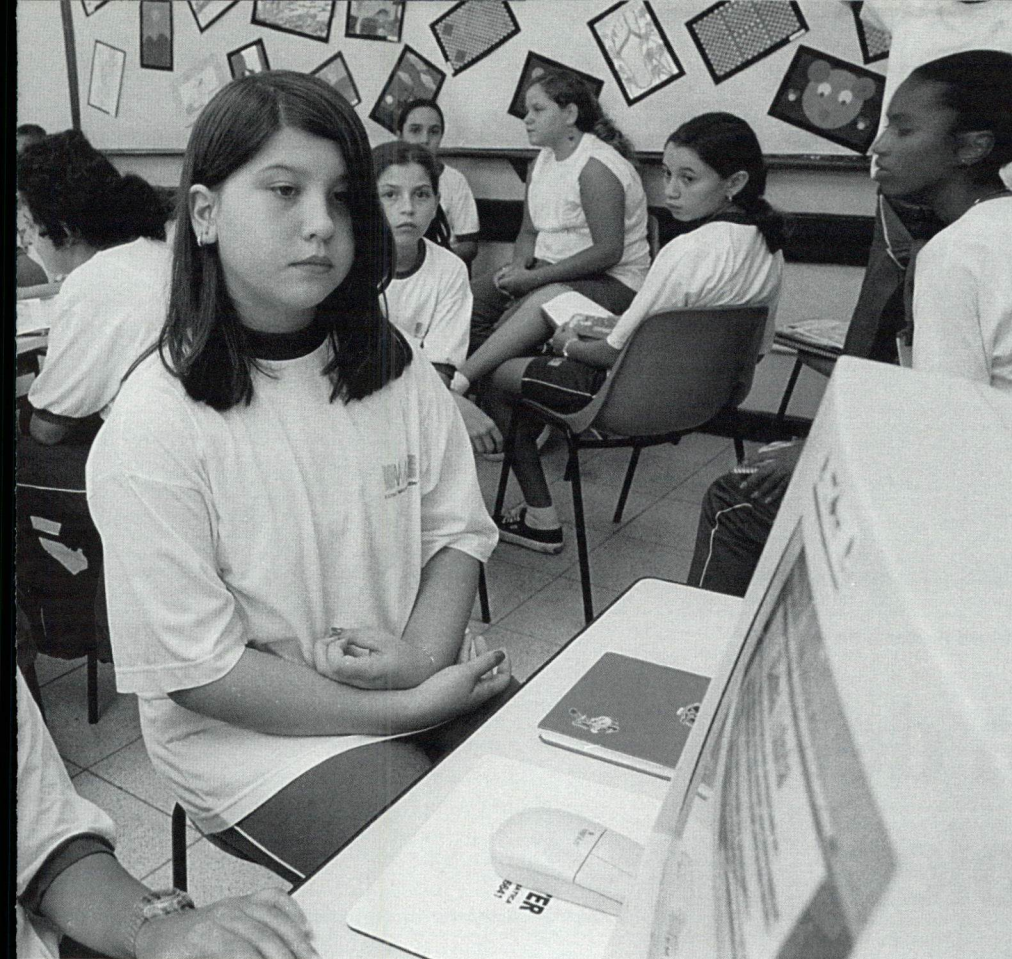
La SEED pidió entonces propuestas a proveedores de computadoras interesados en exhibir sus productos en la feria. De 11 que respondieron a la invitación, ocho resultaron seleccionados. Las autoridades dieron entonces a publicidad el monto de dinero que cada escuela recibiría y organizaron dos ferias de tres días de duración.

Pelczar recuerda que los resultados excedieron todas las expectativas. Más de 1.800 personas tomaron parte y los representantes de las escuelas pasaron la mitad de su tiempo escogiendo sus compras y el resto del tiempo en seminarios de capacitación sobre informática.

Una de las características del evento fue el intenso regateo. “Inicialmente cada escuela indagó precios y productos por su cuenta, pero pronto descubrieron que negociando en grupos podían conseguir mejores precios”, señala Pelczar. Hacia el cierre de la feria, se habían formado “sindicatos” de 30 a 40 escuelas que hicieron fondos comunes con sus órdenes de compra para negociar mejores precios o mejores productos. El resultado final: las autoridades habían estimado que su presupuesto de 12,3 millones de dólares alcanzaría para comprar 6.300 computadoras con accesorios; las escuelas

El desafío era eliminar demoras en la compra de equipos.

WILLIE HEINZ—BID



negociando por su cuenta, obtuvieron 7.708 computadoras, además de unas 200 impresoras y "scanners".

Pese al empeño de las escuelas en comprar más por menos, a los comerciantes no les fue mal en la feria. El gran volumen de ventas les compensó los bajos precios que ofrecieron por sus equipos. "Les gustó también que hubiera mucha más transparencia que en un procedimiento de adquisición centralizado", explica Pelczar.

Alcyone Saliba, funcionario del Banco Mundial que trabajó en la feria de computadoras de Minas Gerais, dijo que allí también la transparencia y la rectitud fueron citadas a menudo por los comerciantes como uno de sus principales beneficios. "Si usted tiene una compañía de computadoras que compite en una licitación por un contrato por 21 millones de dólares, quizás contemple pagar un soborno, así que el riesgo de corrupción es mucho mayor", comentó Saliba. "Pero si se trata de venderle a una escuela o a un pequeño grupo de escuelas, en una feria abierta donde todo el mundo está intercambiando información continuamente, va a ser mucho más difícil sobornar a al-

guien. De esta forma la descentralización de compras puede contribuir a reducir el riesgo de corrupción."

Saliba y Pelczar subrayaron asimismo que hay cierto riesgo en delegar autoridad financiera a administradores de escuelas que nunca tuvieron ese tipo de responsabilidad. Como protección contra los abusos, tanto el programa de Minas Gerais como el de Paraná

requieren que las autoridades de cada escuela aprendan y cumplan las normas establecidas en los manuales de compras. El programa contrató asimismo auditores independientes para verificar durante y después de las ferias que las compras se ajustaban a los requerimientos y que no había irregularidades en las cuentas, agregó Saliba.

El método descentralizado de compra de computadoras permitió a las autoridades escolares locales y a las asociaciones de padres y maestros conducir

el proceso con ventajas y ganancias inmediatas para sus comunidades, apuntó Pelczar. "Alentó la autonomía pedagógica, financiera y administrativa al nivel de cada escuela, lo cual torna a cada administrador más responsable ante su comunidad."

■ **En vez de las 6.300 computadoras que calculaban que podrían comprar con 12,3 millones de dólares, mediante el regateo las escuelas consiguieron 7.708 unidades** ■

NOTICIAS BREVES

Ayuda para mujeres jóvenes

Más de 30 primeras damas de las Américas, reunidas en Ottawa en octubre, emitieron una declaración exhortando a sus gobiernos a hacer más para ayudar a los niños en edad preescolar, prevenir la violencia contra la mujer y educar a muchachas con embarazos imprevistos o enfermedades venéreas. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud difundido en el encuentro, 20 por ciento de los niños que nacen cada año en América Latina tienen una madre adolescente. En tres por ciento de los casos, la madre es menor de 15 años.



Joven madre con su hijo.

Respaldo a reformas en Colombia

Asediada por una recesión y un creciente conflicto interno, Colombia recibirá un total de 4.200 millones de dólares en apoyo financiero para implementar el amplio programa de reformas que acordó con el Fondo Monetario Internacional. El programa, orientado básicamente a restablecer la confianza y reactivar la economía, contiene un componente de seguridad social y contempla aumentar en 900 millones de dólares el gasto social en el curso de los próximos tres años. El BID contribuirá 1.700 millones de dólares al paquete de financiamiento. Las restantes fuentes de recursos incluyen al Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento.

Persiste el crecimiento lento

El crecimiento económico de América Latina sigue siendo demasiado lento para crear los empleos que hacen falta para reducir la pobreza y la desigualdad en los ingresos, afirmó el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, en un foro sobre la banca para el desarrollo celebrado en octubre en México. Iglesias dijo que los bajos índices de ahorro interno son causa y consecuencia de la lentitud en el crecimiento. Sin ahorro propio, la región queda a merced de la inconstancia de los flujos de capitales internacionales.



A merced del flujo de capitales.



América Latina se ha vuelto casi autosuficiente en materia de arroz.

Cornucopia de arroz y frijoles

Un aumento que beneficia a todos

Por ROGER HAMILTON

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ Y FRIJOLES HA crecido a un ritmo extraordinario en América Latina, beneficiando a millones de consumidores pobres que dependen de esta nutritiva dieta, según un estudio del Centro Internacional para la Agricultura Tropical (CIAT).

El aumento en la producción ha permitido a pequeños agricultores entrar en mercados urbanos nacionales y hasta en mercados internacionales, aún en lugares distantes como Japón, puntualiza el autor del trabajo, Art van Schoonhoven, director de estudios de recursos genéticos del CIAT, con sede en Colombia.

La producción regional de arroz se duplicó entre 1966 y 1995, señala el informe. La producción de frijoles creció un 25 por ciento entre 1983 y 1985, y 1993 y 1995. En algunas áreas, el rendimiento por hectárea aumentó hasta 110 por ciento. Ese salto es resultado del desarrollo de mejores variedades en ambos cultivos y de exitosos esfuerzos por ponerlas al alcance de los agricultores.

En el caso del arroz, los programas nacionales de investigación en toda la región han resultado en un promedio de diez nuevas variedades anuales para cultivo en tierras bajas. Casi 40 por ciento de las 300 nuevas variedades son producto de cruces efectuados en laboratorios del CIAT. Casi toda

la producción de arroz en la región se origina en las modernas variedades "semi-enanas", que han permitido a América Latina volverse virtualmente autosuficiente en materia de este alimento básico.

El informe pone de relieve que el aumento en la producción de arroz se debe en gran medida al logro de mayores rendimientos por hectárea y no a un aumento de la superficie cultivada. Esa medida aumentó modestamente, de 5,8 millones de hectáreas a me-

diados de los años sesenta a 6,7 millones de hectáreas en 1995.

Como resultado de ese aumento en la productividad, el precio del arroz ha bajado casi 50 por ciento en términos reales en el curso de tres décadas. Los consumidores han recibido alrededor de 60 por ciento de los beneficios resultantes y los productores el 40 por ciento restante, dice el informe del CIAT.

El precio más bajo del arroz ha beneficiado especialmente a los pobres, porque esos consumidores gastan típicamente la mitad de sus ingresos en comida.

El arroz suministra a los latinoamericanos más calorías que el trigo, el maíz, la mandioca y la papa. Casi 70 por ciento de sus consumidores vive en ciudades.

Actualmente, América Latina dedica unos ocho millones de hectáreas al cultivo de arroz, donde genera casi la mitad de la producción mundial del grano.

Cultivo campesino. Mientras que el arroz típicamente se cultiva en grandes extensiones de campo, los frijoles son un cultivo típico del pequeño agricultor que explota tierras marginales.

Según el informe, los programas nacionales de investigación agrícola en América Latina han resultado en unas 180 nuevas variedades de frijoles, mayormente basadas en líneas experimentales desarrolladas en el CIAT. Alrededor de 40 por ciento de las tierras dedicadas a los frijoles en la región están plantadas con las nuevas semillas.

Como en el caso del arroz, la mayor parte del aumento en la producción de frijoles se debe principalmente a mejores rendimientos por hectárea y no a mayores superficies cultivadas.

El CIAT es una de las tres instituciones de investigación agrícola que reciben apoyo del BID.

Frijoles



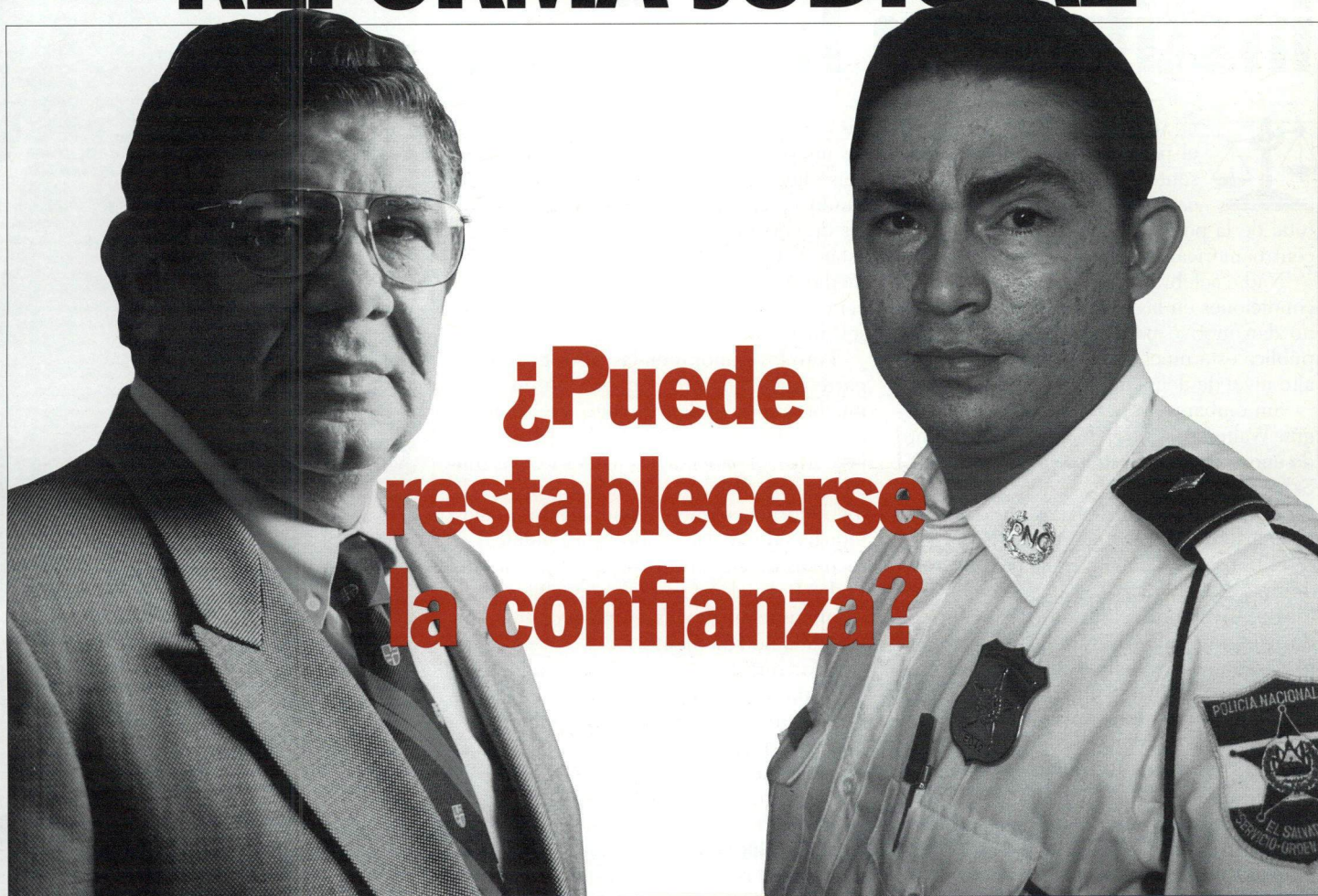
- ▶ Las 8 millones de has. en la región rinden mitad de la producción mundial.
- ▶ Una hectárea de frijoles produce 123 kilos de proteínas, contra 3,4 kilos producidos por la cría de ganado.
- ▶ El banco genético del CIAT contiene 26.500 ejemplares de frijoles de cultivo y 1.500 de variedades silvestres.
- ▶ La producción de frijoles aumenta a razón de 2,7 por ciento al año; la tasa de crecimiento de la población latinoamericana es de 1,9 por ciento.

Arroz



- ▶ Un 55 por ciento de la producción de la región proviene de variedades cultivadas en tierras anegadizas; el resto de variedades para tierras altas.
- ▶ Si no fuera por el aumento de rendimiento de los cultivos irrigados, sería necesario cultivar el doble de tierras para obtener las 20.600.000 toneladas actualmente producidas por año.
- ▶ El consumo anual per cápita en la región se ha triplicado, de 10 kilos en la década de los años veinte a 30 kilos.

REFORMA JUDICIAL



René Hernández Valiente, magistrado de la Corte Suprema de El Salvador, y Eduardo Dubón, subinspector de la Policía Nacional Civil.

EN UNA DEMOCRACIA VIGOROSA EL PODER judicial figura a la par de los poderes ejecutivo y legislativo como uno de los tres pilares del gobierno que velan por la libertad y el estado de derecho. Pero en la mayoría de los países de América Latina, los sistemas de justicia están fracturados y debilitados, al punto que parecen incapaces de sostener el peso de sus responsabilidades constitucionales. Para muchos ciudadanos de la región, los tribunales ni representan el poder ni ofrecen justicia.

Procedimientos bizantinos. Demoras interminables. Jueces que no rinden cuentas a nadie. Fallos dudosos. Interferencias políticas. Sobornos. Impunidad.

Tales palabras lacerantes aparecen a diario en la prensa latinoamericana en notas sobre el poder judicial. Año tras año, las encuestas de opinión pública evidencian que las cortes son la institución menos respetada en la región. Un reciente examen de esas encuestas realizado por una analista legal de la Universidad de Londres, Pilar Domingo,

halló que existe una alarmante unanimidad: "En Argentina, sólo 13 por ciento de los consultados dijeron algo positivo acerca del poder judicial; en Perú, 92 por ciento desconfía de los jueces; en Brasil, un 79 por ciento no tiene confianza en el sistema judicial".

Durante gran parte de este siglo, la trágica situación de las cortes en América Latina fue eclipsada por los profundos conflictos ideológicos y las dictaduras militares que padeció la región. Pero en años recientes, a medida que se fue afianzando la democracia, el poder judicial se convirtió en blanco de un incesante escrutinio público. Eso se debe en parte a que las reglas del juego han cambiado. Las disputas políticas que solían resolverse a puertas cerradas en negociaciones entre élites ahora se ventilan en las cortes. Armadas con la ratificación de tratados que amparan una definición más amplia de los derechos humanos, miles de personas reclaman reparaciones por injusticias que, en algunos casos, ni siquiera figuran en los códigos penales de sus propios países.

Casi sin excepción, los gobiernos en América Latina están asediados por reclamos en favor de reformar los tribunales. Hay numerosos programas de reforma en marcha, pero lograr progresos ha resultado ser extraordinariamente difícil.

¿Por qué es tan difícil reformar las cortes? ¿Cuáles son los orígenes de esta crisis? ¿Se podrá restablecer la confianza en el poder judicial? Este suplemento especial examina el caso de El Salvador, un país que ha emprendido uno de los proyectos más radicales en la región para conseguir que la justicia funcione.

El poder judicial salvadoreño inició en 1983 una serie de reformas que comienzan a dar frutos.



La historia de una institución huérfana



EN ALGÚN MOMENTO DEL AÑO 2000, el porcentaje de detenidos sin sentencia firme en El Salvador caerá a casi 50 por ciento del total de la población carcelaria de ese país centroamericano.

Nadie celebrará ese acontecimiento. Las condiciones en las prisiones de El Salvador no dan motivo para festejos, y la opinión pública está mucho más preocupada con el alto nivel de delincuencia en el país.

Sin embargo, será un logro notable. Según Walter Aquino, jefe del departamento de encausados del sistema presidiario de El Salvador, hace siete años había 12.000 personas en prisiones diseñadas para albergar un máximo de 7.000 ocupantes. Nueve de cada 10 presos habían permanecido detenidos más allá del plazo legal para recibir sentencia. En algunos casos hasta habían pasado más tiempo en la cárcel que las penas previstas para los delitos que supuestamente cometieron. ¿Por qué?

Informe especial de Paul Constance.

La respuesta tiende a ser genérica: expedientes extraviados, testigos desaparecidos, investigaciones malogradas, abogados defensores ausentes o la llegada de un caso más urgente al juzgado.

Esto no es raro en América Latina. El porcentaje de presos sin sentencia siempre ha sido uno de los indicadores más lacerantes de la ineficiencia de los sistemas judiciales de la región. En un estudio difundido en 1998, la organización Human Rights Watch denunció que, en promedio, 70 por ciento de los reclusos en América Latina y el Caribe aguardaban sentencia. Con pocas excepciones, el hacinamiento es la norma en las cárceles de la región.

Entonces, ¿qué está pasando en El Salvador? La respuesta simple es que en abril de 1998 la Asamblea Legislativa derogó un código penal y un código procesal penal que databan de 1860, y

los reemplazó con nuevas normas. Gracias a los nuevos procedimientos, que son mucho más eficientes, los tribunales están comenzando a poner al día los casos atrasados. Miles de personas que no debían estar presas están siendo puestas en libertad. Hoy, en promedio, los nuevos detenidos reciben sentencia o son dejados en libertad dentro de los seis meses posteriores a su arresto.

Pero los cambios en las cárceles son una parte relativamente pequeña de un viraje mucho mayor en la forma en que se administra la justicia en El Salvador. El acceso a las cortes, el papel de los jueces y otros funcionarios judiciales, la codificación de delitos, la forma en que se conducen los juicios; todo ha sido transformado radicalmente. Los recursos financieros de las instituciones del Poder Judicial, así como la capacitación y la compensación de sus empleados, han aumentado notablemente.

¿Por qué tardó tanto El Salvador para enfrentar estos problemas? Y, ¿qué factores permitieron que la situación empezara a mejorar? Las raíces del problema, que se remontan a la primera mitad del siglo XIX, son similares en toda América Latina.

Un distinguido legado. Virtualmente todos los países de la región tienen sistemas jurídicos que siguen la tradición del derecho romano, basado en códigos que compilan leyes. En cambio, Gran Bretaña y sus antiguas colonias se guían por el derecho consuetudinario. A mediados del siglo XIX, cuando las naciones recién independizadas de América Latina comenzaban a dar forma a sus sistemas legales, muchas optaron por adoptar el Código Napoleónico de 1804, que había formalizado el derecho romano en una serie de detallados estatutos. El código francés fue traducido al español por el jurista venezolano Andrés Bello. Chile lo adoptó como código civil en 1855. El código civil salvadoreño de 1860, así como los de muchos otros países latinoamericanos, estaba basado en la tradición de Bello.

A diferencia de los magistrados del sistema anglosajón, cuyos fallos sientan precedente para otros jueces que intervengan en casos similares, los jueces del Código Napoleónico debían limitarse a aplicar leyes formuladas por jurisconsultos y aprobadas por legislaturas naciona-

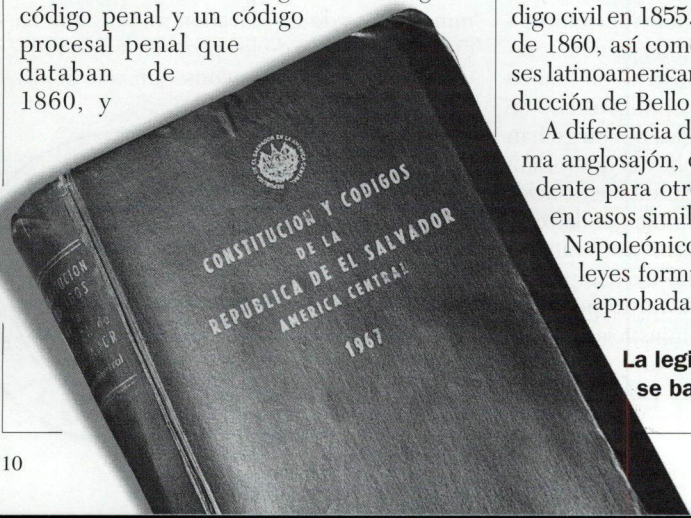
La legislación salvadoreña se basa en el derecho romano.



René Hernández Valiente, miembro de la Corte

les. En muchos países, los jueces eran básicamente empleados públicos que comenzaban su carrera tribunalicia a poco de matricularse como abogados. Los ascensos se determinaban por antigüedad. En el fuero penal, los jueces de primera instancia cumplían un papel doble, bajo el cual dirigían la investigación y dictaban sentencia. Los defensores y los fiscales tenían una participación muy limitada en el proceso.

En los países latinoamericanos, los procedimientos judiciales eran (y en la mayoría de los casos siguen siendo) "actuados", es decir que casi todos los pasos de una causa legal se cumplían presentando escritos ante un secretario del juzgado que a su vez sometía los documentos a un juez. Los jueces los examinaban y emitían resoluciones o fallos,





rema, con el nuevo Código Penal.

a menudo sin entrevistar personalmente a las partes o a los testigos.

El poder huérfano. Como otros sistemas legales, el derecho civil tradicional ha evolucionado considerablemente desde el siglo XIX. En la Europa Continental, por ejemplo, los códigos civiles han sido adaptados y ampliados para incorporar realidades sociales, técnicas y legales modernas. Las normas procesales también han sido modificadas a la luz de la creciente eficiencia que requieren las economías industrializadas.

Pero en América Latina varios factores frenaron esa evolución. En países con gobiernos inestables y autoritarios, con frecuentes intervenciones militares y enraizadas prácticas de favoritismo político, el poder judicial

nunca tuvo oportunidad de surgir como una institución fuerte e independiente. En vez de actuar como contrapeso al ejecutivo y al legislativo, en muchos países el poder judicial estaba abiertamente al servicio de la fuerza política dominante. Muchos gobiernos ponían y sacaban a jueces a su antojo. Con frecuencia, los nombramientos en los tribunales de primera instancia eran recompensas para militantes políticos.

El escaso prestigio del poder judicial se reflejaba en la estrechez de su presupuesto. Las limitaciones de recursos e instalaciones hacían imposible satisfacer la demanda de servicios judiciales. Esos factores se combinaron con la opacidad inherente del procedimiento escrito para engendrar incentivos a la corrupción y el abuso de influencias. Quienes no tenían medios para sobornar o contratar abogados con conexiones se veían privados de justicia. Pero para quienes tenían buenos contactos políticos o recursos económicos para arreglar al juez, el sistema podía funcionar de maravillas.

La guerra como catalizador. Paradójicamente, en el Salvador el problema de la justicia llegó a una situación límite debido a una sangrienta guerra civil. En 1983, mientras el país estaba en las primeras etapas de un conflicto que eventualmente cobró unas 70.000 vidas, un grupo de abogados y juristas comenzó a argumentar que había que reformar el sistema judicial. El gobierno formó una comisión para examinar el código civil y proponer cambios. La Constitución adoptada en 1983 creó un Consejo Nacional de la Judicatura para capacitar y seleccionar jueces. En 1990, el presidente Alfredo Cristiani nombró ministro de justicia a René Hernández Valiente y le encomendó continuar la reforma. En 1991, la Asamblea Legislativa aprobó enmiendas constitucionales que fortalecieron la independencia del poder judicial, al menos en teoría. Subsecuentemente, los colaboradores de Hernández Valiente enviaron a la Asamblea proyectos de ley en materia penal, familiar, juvenil y penitenciaria.

Por cierto, el movimiento reformista tal vez no hubiese prosperado de no ser por los acuerdos de paz firmados por el gobierno y los guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en 1992. A esa altura, la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional habían caído en cuenta del horror de las atrocidades cometidas durante



La traducción del Código Napoléonico de Andrés Bello influyó mucho en la región.


la guerra. En 1993 la Comisión de la Verdad, un cuerpo independiente creado como parte de los acuerdos de paz, emitió un informe que asignaba responsabilidades por los crímenes de guerra. El informe sostenía que el sistema judicial compartía la responsabilidad por la tragedia por no haber protegido el estado de derecho. "El Salvador no tiene un sistema de administración de justicia que satisfaga los requisitos mínimos de objetividad e imparcialidad de manera de que la justicia pueda ser administrada en forma efectiva", concluyeron los autores del informe.

El informe sólo hacía eco de algo que millones de salvadoreños habían estado diciendo durante años. El sistema judicial estaba quebrado. Si El Salvador iba a recuperarse de la guerra y convertirse en una democracia plena, debía comenzar por transformar las cortes.

EL BID Y LA REFORMA JUDICIAL

CON UN PRÉSTAMO DE 22.200.000 DOLARES al Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema Judicial, aprobado en 1996, el BID está ayudando a financiar diversos aspectos de la reforma en curso en El Salvador. Entre ellos se cuentan, un programa para expandir y renovar centros para la reeducación de menores infractores, y proyectos para fortalecer la administración y planificación del sistema judicial.

La importancia que los países de América Latina le asignan a la reforma judicial se puede deducir por el número de países miembros del BID que han solicitado préstamos con ese propósito en los últimos años. Además de El Salvador, el BID está apoyando programas de reforma judicial en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En otros países, como Ecuador, Paraguay y Venezuela, el BID está financiando cooperaciones técnicas para el sector judicial. Además, en países como Brasil, Chile y Nicaragua, el Banco está financiando el desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

 Para más información sobre proyectos del BID, visite el sitio www.iadb.org.

¿Confiaría en esta corte?

La reforma fortalece la independencia judicial y busca aumentar la credibilidad de los jueces



"AUNQUE SEA DE JUEZ PONEME", reza un viejo chiste de abogados sobre un colega desesperado que le mendiga un cargo público a un político amigo.

En esta ocasión quien lo cuenta es Emma Dinorah Bonilla, jefa del departamento de ciencias jurídicas de la prestigiosa facultad de derecho de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador. Y, como todo chiste, tiene una cuota de verdad.

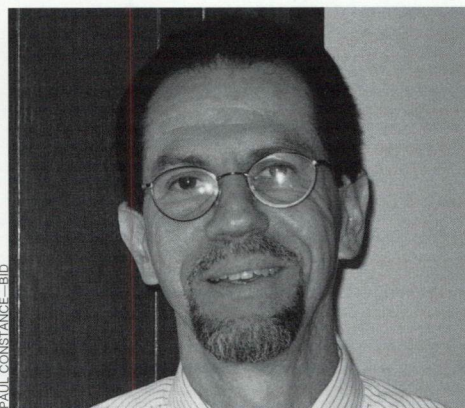
El chascarrillo resume un vergonzoso legado que buscan superar quienes preparan a las nuevas generaciones de abogados y futuros magistrados. "En el pasado, aunque teníamos algunos jueces muy bien preparados, la verdad es que los jueces eran nombrados por casi cualquier razón menos su capacidad", comenta Bonilla.

Esa mala opinión de los jueces como supuestos beneficiarios de favores políticos tiene hondos raíces en muchas de las naciones de América Latina. En El Salvador comienza con los jueces de paz, quienes frecuentemente son el único contacto que tienen los ciudadanos comunes con el sistema judicial. Hasta hace poco, no era necesario ser abogado para ser juez de paz. Esto no era necesariamente malo, ya que en muchos países hay jueces de paz sin entrenamiento formal que brindan servicios judiciales indispensables en las poblaciones más aisladas. Pero en El Salvador el proceso de designación de estos funcionarios se había politizado tanto que el cargo había perdido mucho de su tradicional prestigio.

Los jueces de instancias superiores sí debían ser abogados, pero eran designados por períodos cortos y ascendían a exclusiva discreción de la Corte Suprema, la cual era reemplazada *in toto* por cada nuevo gobierno. Los candidatos para el máximo tribunal eran elegidos por el Poder Ejecutivo o sus aliados y requerían sólo una mayoría simple en la Asamblea Legislativa para ser confirmados. "Todo eso llevó a una profunda falta de confianza en el Poder Judicial que continúa hasta ahora", afirma Rafael Durán Barranza, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. "La gente no confía en los jueces, no confía en la Corte Suprema, no confía ni siquiera en los abogados".

Una base para la credibilidad. Algunas de las reformas más radicales aprobadas por la legislatura salvadoreña apuntan a restaurar la fe de la ciudadanía en la integridad y la capacidad de los jueces y otras autoridades del poder judicial.

Primero, la Asamblea tomó medidas para terminar con la dependencia financiera y política del poder judicial con respecto del



PAUL CONSTANCE - BID

“ [El nuevo método para elegir jueces] representa un enorme avance, basado en un proceso infinitamente superior al anterior. ”

FRANCISCO DÍAZ RODRÍGUEZ
Consejo Nacional de la Judicatura

ejecutivo. Puso en vigencia una enmienda constitucional que requiere reservar anualmente seis por ciento de los ingresos fiscales para el presupuesto del poder judicial, uno de los niveles más altos en América Latina. Además de impedir que el presupuesto sea utilizado para ejercer presiones políticas sobre el poder judicial, esta medida le confiere al poder judicial una mayor estabilidad presupuestaria. Esto ha permitido aumentar salarios, invertir en capacitación y nuevas instalaciones, cubrir el costo de la modernización administrativa y solventar el proceso de reforma.

Una segunda ley fortaleció al Consejo Nacional de la Judicatura, un cuerpo concebido como contrapeso del poder administrativo concentrado en la Corte Suprema. Como en muchos países latinoamericanos, la Corte Suprema salvadoreña cumple varias funciones administrativas, tales como seleccionar y promover jueces y matricular abogados, por encima de sus funciones puramente jurídicas. Esa superposición de responsabilidades puede engendrar potenciales conflictos de intereses.

El consejo fue creado para asumir algunas funciones ejercidas por la Corte Suprema y para representar los intereses de otros profesionales de la rama judicial. Lo integran seis consejeros elegidos por facultades de derecho, asociaciones de abogados y el ministerio público, que incluye fiscales y defensores públicos.

Hoy, gracias a la reforma, el consejo fiscaliza el ingreso a la carrera judicial. Ahora hay que ser abogado, pasar un examen y completar cursos de capacitación organizados por el consejo para acceder al primer peldaño, un juzgado de paz. El consejo también confecciona listas de candidatos para nombramientos y ascensos judiciales, evalúa la actuación de jueces acusados de incompetencia o corrupción y opera una escuela judicial profesional (ver nota en la página 19).

Finalmente, la Asamblea modificó el proceso para elegir jueces de la Corte Suprema. Para limitar sus lazos con el gobierno de turno, los 15 jueces sirven por mandatos de nueve años. Cada tres años se renueva un tercio del máximo tribunal. El poder ejecutivo ya no designa candidatos a su discreción. Ahora la Asamblea Legislativa debe respaldar, por una mayoría de dos tercios de sus miembros, a cinco candidatos surgidos de una lista integrada por personas postuladas por el Consejo Nacional de la Judicatura y por aspirantes elegidos mediante una elección nacional en la que pueden votar todos los abogados salvadoreños.

¿Dio resultado? El nuevo procedimiento de elección fue puesto a prueba en 1994, cuando se lo empleó por primera vez para integrar una nueva Corte Suprema. El proceso de selección fue muy tenso. Varios jueces que habían sido nombrados durante la guerra civil emprendieron estentóreas campañas para retener sus puestos. Pero para ese entonces la composición de la legislatura había cambiado; de hecho incluía un bloque de ex guerrilleros. Como resultado, ninguno de los 15 jueces del antiguo tribunal logró los votos necesarios para ser ratificado.

Casi 75 por ciento de los abogados salvadoreños participaron en la elección de candidatos a la Corte Suprema. La lista de finalistas presentada a la Asamblea Legislativa contenía mayormente nombres de profesionales de sólida reputación. De hecho, nin-



La imagen pública de los tribunales salvadoreños ha mejorado, pero algunos todavía perciben grietas en su estructura.

gundo de los nuevos miembros fue acusado de ser incompetente o corrupto. "Eso representó un enorme avance, basado en un proceso que es infinitamente superior al anterior", dice Francisco Díaz Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de la Judicatura y ex titular de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.

La nueva Corte Suprema se abocó a la implementación de varias reformas pendientes y comenzó a ejercer su independencia en temas jurídicos (ver página 14). La gente comenzó a hablar de la corte como un emergente factor de poder en el país. La clase política, que nunca había prestado mucha atención al poder judicial en los tiempos en que le estaba completamente subordinado, cobró un repentino interés por los asuntos tribunales. En 1997, cuando un tercio de las magistraturas debía ser renovado, en la legislatura se comenzó a hablar del tradicional "reparto" de cargos que los partidos políticos solían concertar tras puertas cerradas. En esa oportunidad hubo mucha más presión, más manipulación y más vetos de candidatos, recuerda Díaz.

La reaparición de las presiones políticas se notó en otras áreas del sistema judicial. Como parte de la reforma, el procurador general,

también requiere confirmación por dos tercios de la legislatura, recibió mayores facultades para investigar fechorías de funcionarios públicos (ver página 16). Los salvadoreños se sorprendieron, por ejemplo, cuando el primer procurador general en ejercer exitosamente esos poderes mandó a la cárcel a varios miembros de la Policía Nacional Civil por fraguar pruebas en el notorio caso de una periodista asesinada. Pero cuando concluyó el mandato de ese procurador, en julio, la legislatura no le renovó el nombramiento y entró en una prolongada negociación en torno a su eventual sucesor.

Muchos observadores interpretaron esa demora como prueba de que el poder ejecutivo y la Asamblea Legislativa no se sienten a gusto con un procurador general fuerte e independiente.

"Yo veo un proceso de contrarreforma", opina Benjamín Cuéllar Martínez, director de una entidad defensora de los derechos humanos en San Salvador.

Lorena Peña, una diputada del FMLN en la legislatura, también está preocupada. "Pensamos que cuando cargos importantes son otorgados por 'reparto' se entra en el camino de la corrupción", dice. Pero Peña culpa también a su propio partido por no tomarse el tiempo de examinar cuidadosamente las credenciales de los candidatos a cargos judiciales. "En esta asamblea no se pueden obtener dos tercios de los votos sin apoyo del FMLN", apunta. "Nosotros hemos contribuido a algunos errores".

UN PROBLEMA REGIONAL: un diario argentino anuncia la suspensión de un juez acusado de irregularidades.

¿QUIEN JUZGA A LOS JUECES?

DESDE 1994, LA CORTE SUPREMA SALVADOREÑA ha destituido o suspendido a casi un juez por mes, en promedio. Este es un hecho extraordinario para América Latina, donde las medidas disciplinarias contra los magistrados son raras. Sin embargo, no ha bastado para disipar las dudas de los salvadoreños sobre la integridad del sistema judicial.

Parte de la razón es que después de los acuerdos de paz de 1992, hubo sectores que demandaron una purga de decenas de jueces supuestamente corruptos. Pero la Corte Suprema opinó que tal defenestración sería ilegal y estableció una comisión para recibir acusaciones, evaluar evidencia e imponer sanciones.

Muchos críticos de la reforma sostienen que la Corte Suprema no debería fiscalizarse a sí misma o a las cortes de instancias inferiores o los abogados. Dichos críticos creen que es poco probable que los miembros de la Corte Suprema se acusen unos a otros y que el riesgo de que decida castigos, además de su facultad inapelable en materia de ascensos, socava la independencia de los demás jueces.

Esas inquietudes impulsaron la aprobación de una enmienda constitucional que en 1991 otorgó al Consejo Nacional de la Judicatura el poder de evaluar a jueces acusados de mala conducta. El consejo presenta sus evaluaciones a la Corte Suprema, que entonces inicia su propia investigación, reservándose el poder de imponer sanciones. Ese arreglo no ha satisfecho a los críticos, quienes sostienen que el Consejo debe evaluar y también sancionar a jueces.

LO DECIDIO EL SENADO

Suspendieron al juez del caso

¿Quién redactó esta legislación?

Nuevos códigos de leyes buscan cubrir lagunas creadas por un siglo de cambios



HASTA HACE POCOS AÑOS, EN EL Salvador, un marido podía apalear a su mujer y dejarla virtualmente al borde de la muerte sin correr gran riesgo de ir preso.

Un hijo natural tenía pocas probabilidades de conseguir que su padre le pasase aliméntos si el progenitor no quería pagar.

Un presunto delincuente menor de edad podía quedar encerrado por años en una celda llena de criminales adultos.

Antes de 1994, ninguna de esas injustas situaciones hubiera sido considerada ilegal. Pero ese año la Asamblea Legislativa salvadoreña reemplazó partes del código civil que había estado vigente desde 1860 con uno de los códigos de legislación familiar más progresistas de América Latina. Un año después, la legislatura aprobó nuevas leyes que reconocían delitos juveniles y exigían que los presos menores de edad tuviesen sus propios centros de detención y rehabilitación. En abril de 1998, la legislatura alumbró nuevos códigos en lo penal y lo procesal penal que tipificaron nuevas categorías de delitos y establecieron nuevos procedimientos para las investigaciones y nuevos lineamientos sobre penas y el tratamiento de presos (ver resumen en la página 18).

El Salvador es un caso relativamente raro ya que optó por hacer borrón y cuenta nueva en áreas de su sistema legal que engendran más de la mitad de la actividad de sus tribunales. La mayoría de los demás países latinoamericanos están siguiendo alternativas más graduales como la reforma de ciertos aspectos de sus códigos civiles o de sus reglas procesales.



PAUL CONSTANCE—BID

“ Examinamos la legislación de 1860 y nos preguntamos: ¿dónde están los derechos del niño y de la mujer? ”

MARÍA TERESA DE MEJÍA
Instituto Salvadoreño
de Protección al Menor

Varios factores influyeron en la adopción de una estrategia de todo o nada en El Salvador. Uno fue el efecto de la guerra civil, que puso en evidencia el vínculo entre violaciones de los derechos humanos y las deficiencias en las leyes y procedimientos judiciales. La guerra civil también obligó a

reconocer la creciente brecha entre el código civil y la realidad social de la mayoría de la población. Por ejemplo, miles de niños que habían quedado huérfanos o separados de sus padres debido al conflicto estaban internados en orfanatos estatales improvisados. Como el código civil no contemplaba tal situación, el gobierno carecía de bases legales para formular políticas que atendieran a las necesidades a largo plazo de esos niños. Otro caso: un estudio halló que casi la mitad de las parejas salvadoreñas con hijos no estaban legalmente casadas. Debido a la estricta definición de matrimonio inscripta en el código civil, esas familias vivían en una suerte de limbo legal en donde era imposible resolver disputas sobre la custodia

de niños, la separación de bienes y otros asuntos de familia.

El código civil salvadoreño no reflejaba los derechos y principios articulados en la Constitución de 1983 y tratados ratificados por la Asamblea Legislativa como la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Examinamos la legislación de 1860 y nos preguntamos: ¿dónde están los derechos del niño, dónde están los derechos de la mujer, dónde están los derechos de la familia?”, recuerda María Teresa de Mejía, quien ahora dirige el Instituto Salvadoreño

Los códigos civiles están siendo actualizados en casi toda América Latina.

de Protección al Menor (ISPM). Los ciudadanos se hacían preguntas similares sobre la protección de los derechos de los presos, las víctimas de torturas y otros temas como la contaminación industrial o la corrupción en el gobierno que no estaban contemplados en el código de 1860.

Esas disquisiciones no eran meramente académicas, ya que según los sistemas penales inspirados en la tradición del derecho romano, sólo es delito aquello que está explícitamente descrito como tal en la ley.

Un debate público. Desde la década de los ochenta, con la ayuda de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos (USAID) y luego de las Naciones Unidas, pequeños equipos técnicos en sucesivos gobiernos salvadoreños comenzaron a preparar proyectos de leyes para zanjar esas lagunas jurídicas. Además de codificar derechos constitucionales y especificar nuevos delitos, los proyectos proponían un proceso judicial basado en procedimientos orales y manejado por fiscales y defensores públicos (ver páginas 16 y 18).

Consciente de que la Asamblea Legislativa no aprobaría tales reformas sin un fuerte apoyo popular, el Ministerio de Justicia salvadoreño lanzó un amplio programa de consulta pública para cada una de las pro-





ña le reconocen dos grandes logros: la creación de nuevas avenidas para acceder a la justicia y nuevos procedimientos que han hecho más eficientes a los servicios judiciales. Para cumplir con los nuevos códigos de menores y de familia, por ejemplo, el poder judicial construyó y equipó decenas de nuevos juzgados dedicados exclusivamente a esos fueros. Esos nuevos tribunales se han visto abrumados casi desde su inauguración en 1994. La diputada Peña señala como ejemplo a los casos de violencia doméstica. "Antes de que fuera aprobado el nuevo código, se denunciaban unos 300 casos de violencia doméstica al año en El Salvador. Después de que la ley fue aprobada y se abrieron los nuevos juzgados, se registraron 14.000 casos sólo en un año".

Francisco Díaz Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de la Judicatura, dice que la popularidad de esos tribunales se debe en parte a la creciente confianza que sienten las mujeres en la posibilidad de lograr justicia por la vía judicial. "Las posibilidades de que una mujer en conflicto con su esposo obtenga un fallo favorable son mucho, mucho más altas que antes", explica.

Pero los juzgados de menores y de familia no se limitan a dictar fallos. Las nuevas leyes le asignan al estado la responsabilidad

de ayudar a las familias y a los menores de edad mediante asistentes sociales y psicólogos que siguen de cerca los casos y asesoran a las cortes. Los menores delincuentes, por ejemplo, son encargados al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, un ente estatal que desarrolla programas de rehabilitación en centros completamente separados del sistema carcelario.

Aunque sería prematuro evaluar los efectos de los nuevos códigos un indicio que nadie discute. "El caso penal promedio requería de dos años y medio a tres años para ser resuelto bajo el antiguo código penal", dice René Hernández Valiente, quien fuera designado miembro de la Corte Suprema en 1994 tras desempeñarse como ministro de justicia. "Hoy en día, el promedio está en unos cuatro meses".

Los nuevos códigos han mejorado asimismo el acceso a la justicia al ampliar la autoridad de los 323 jueces de paz del país (ver recuadro). Estos funcionarios, ahora deben tener título de abogado y aprobar exámenes que toma el Consejo Nacional de la Judicatura. Además de evitar que casos menores abrumen a los tribunales superiores, los juzgados de paz permiten que la gente más pobre resuelva sus problemas legales más rápidamente y más cerca de donde viven. ■

puestas. Publicaron los anteproyectos en diarios de todo el país y pidieron comentarios a las partes interesadas. A pesar de las controversias, los códigos juvenil y de familia obtuvieron inmediato apoyo de una amplia gama de sectores y fueron aprobados con relativa facilidad.

Los códigos penales fueron harina de otro costal. "Pasamos cuatro años discutiéndolos", recuerda Lorena Peña, una diputada del FMLN que encabeza la Comisión de la Niñez, Familia y Mujer en la Asamblea Legislativa. "Escuchamos a todas las organizaciones de derechos humanos, a todas las asociaciones de abogados, a todos los demás interesados, y tuvimos tremendos debates entre nosotros mismos". De hecho, el debate no ha cesado ni con la entrada en vigencia de los nuevos códigos. Además de modificar las leyes originales, la Asamblea Legislativa también está considerando otras enmiendas adicionales (ver página 20). Peña, que está en desacuerdo con varios puntos importantes del código penal, cree que el prolongado debate le brindó credibilidad a la reforma. "Nadie puede argumentar que estas leyes no son producto de un consenso", afirma.

¿Exitosos? Una buena legislación no es garantía de justicia. Pero hasta los críticos más enconados de la reforma judicial salvadore-

La primera parada: un juzgado de paz



Lesbia Alvarenga Barahona

"RECIBIMOS PRINCIPALMENTE CASOS DE asalto, hurto, agresión, extorsión y homicidio, a menudo relacionados con drogas".

En un pequeño juzgado ubicado sobre una calle polvorienta de Soyapango, un modesto suburbio de San Salvador, la juez de paz Lesbia Alvarenga Barahona describe un típico día de trabajo. Bajo el nuevo código penal, los juzgados de paz son la base de la pirámide del sistema judicial salvadoreño. A diferencia de sus predecesores, que hacían poco más que remitir

casos a cortes superiores, Alvarenga dirige un juzgado integral que entiende en todo tipo de problemas legales. Puede aprobar acuerdos de conciliación obligatorios en casos de delitos penados con un máximo de tres años de prisión, los cuales constituyen gran parte de la labor en su juzgado. Procesa reos por delitos graves y decide su detención preventiva o su libertad condicional. Hasta se encarga de causas civiles o comerciales por disputas inferiores a 10.000 colones, unos 1.000 dólares.

Esa suma de responsabilidades puede ser abrumadora. El presupuesto del juzgado de paz es tan limitado que la propia magistrada debe encargarse de entrenar a su personal y usar su propio automóvil para transportar detenidos. Aún así, es una apasionada defensora de los nuevos códigos.

"Ya no tenemos el proceso burocrático de redactar escritos, enviarlos al juez, decirle a la gente que vuelva otro día y perder todo ese tiempo", dice. "Ahora, la gente llega y su caso se resuelve ese mismo día".

¡Nos vemos en la corte!

El nuevo procedimiento oral asigna papel protagonista a fiscales y defensores



SI ALGUNA VEZ LLEGAN A ENFRENTARSE en un tribunal, Pedro Cruz y Aristides Perla seguramente se sacarán chispas.

El fiscal Cruz está a cargo de la Unidad de Delitos Especiales en la Fiscalía General en San Salvador. Perla, un defensor público, es el coordinador de defensa penal de la Procuraduría General de la República para el departamento de La Libertad.

La Procuraduría y la Fiscalía son las dos mitades del Ministerio Público en El Salvador. Aunque técnicamente no es parte del Poder Judicial, el ministerio pasó de una relativa obscuridad al primer plano del sistema judicial el 22 de abril de 1998, cuando entraron en vigencia el nuevo código penal

y el nuevo código procesal penal. Los nuevos códigos ampliaron en gran medida las facultades de los fiscales y los defensores públicos en los juicios penales.

Cruz y Perla son conocidos como celosos y efectivos protagonistas de sus respectivas funciones, en las cuales demuestran un empeño que eclipsa sus sueldos modestos y las carencias de personal y apoyo técnico.

Sin embargo, cuando las reformas penales estaban siendo debatidas en la Asamblea Legislativa, la perspectiva de asumir nuevos papeles les parecía abrumadora a estos jóvenes profesionales. "Pensamos que estábamos perdidos", dice Cruz. Aunque había podido asistir a un curso intensivo de una semana sobre las complejidades de los nuevos códigos, muchos de sus colegas sólo tenían una vaga noción de los inminentes cambios. "Los primeros días fueron una locura, porque nadie sabía exactamente cómo iban a funcionar las cosas en la práctica", recuerda.

Era más que una inquietud burocrática.

“...si la policía no coopera, podemos presentar demandas.”

PEDRO CRUZ
Fiscal

Entre los cambios más radicales dispuestos por el código figuraba un nuevo orden jerárquico en la dirección de investigaciones penales. En El Salvador, como en la mayoría de los países latinoamericanos, los fiscales han tenido históricamente un papel marginal en la instrucción de causas penales, que suelen ser dirigidas por jueces y ejecutadas con considerable independencia por la policía. Por ejemplo, la policía podía asignar detectives en cada caso, ordenar arrestos y manejar la evidencia a su parecer. Los nuevos códigos en materia penal dieron vuelta ese esquema.

Ahora, los jueces deben circuns-



Jueces de un tribunal de alzada se disponen a e

cribirse a dictar sentencia sobre la base de la validez de la evidencia, los testimonios y los argumentos presentados por los fiscales por un lado y los defensores por el otro, todo en el marco de juicios orales y públicos en donde acusadores y acusados deben estar presentes. Son los fiscales, y no los jueces, quienes hacen la primera determinación sobre si hay suficiente evidencia para procesar a un sospechoso; asimismo pueden archivar un caso si no satisface los requisitos legales. En cuanto a la policía, "simplemente recibe órdenes del fiscal", dice Cruz. "El fiscal le dice a la policía exactamente cómo llevar a cabo la investigación, porque el fiscal sabe lo que va a necesitar para ganar el caso".

Las reformas fueron concebidas para evitar interferencias políticas en investigaciones penales y trapisondas procesales como la adulteración de evidencia. Muchos sectores de la policía no estaban satisfechos con los cambios. Altos oficiales policiales manifestaron públicamente que los fiscales harían imposible arrestar a criminales. Hubo momentos tensos, en particular cuando la Unidad de Delitos Especiales encausó a varios agentes de policía por fraguar evidencia en un caso de una periodista asesinada.

Esa unidad de la Fiscalía General investiga casos complejos como resonantes homicidios, secuestros, fraudes financieros y otros delitos perpetrados por organizaciones criminales. Cruz debe hacer su labor con sólo ocho fiscales, un asistente y dos automóviles. Aunque Cruz admite con sinceridad la virtual imposibilidad de cumplir su mandato con recursos tan magros, defiende con ardor al nuevo código penal. "Aún vamos a enfrentar todo tipo de dificultades y obstrucciones. Pero ahora, si un investigador de la policía deja de hacer algo, los fiscales tienen autoridad para exigir una explicación, y si la policía no coopera, podemos presentar demandas. De una manera u otra hemos podido resolver algunos casos, aun si hay siempre la insatisfacción de saber que podríamos haber hecho más".



PALUL CONSTANCE—BID

WILLIE HEINZ—BID



char argumentos en un juicio.

“ Nos hemos convertido en verdaderos custodios de la integridad legal del proceso judicial. ”

ARÍSTIDES PERLA
Defensor público



PAUL CONSTANCE—IDB

Custodios. Arístides Perla también enfatiza los beneficios de los nuevos códigos. “Antes, el defensor público era una figura decorativa en un juicio penal, una mera formalidad”, dice. “No teníamos control sobre lo que ocurría durante el proceso y, como resultado, no teníamos credibilidad”.

Aunque la constitución salvadoreña de 1983 consagraba el derecho de todo acusado a contar con un abogado, en la práctica el Ministerio Público, crónicamente escaso de fondos, a menudo no lo proveía. El cargo de defensor público era tan mal remunerado que casi nunca atraía a profesionales sólidos. Las reglas procesales del viejo código les dejaban a los defensores pocas posibilidades de intervenir efectivamente en favor de sus patrocinados. Como todo se hacía por escrito, los juicios demoraban años, lo cual hacía improbable que un mismo defensor público siguiera una causa hasta su resolución.

Bajo la nueva legislación, todo procedimiento judicial en donde falte un defensor es considerado nulo. Los defensores pueden llamar testigos, llevar a cabo sus propias investigaciones en favor de un acusado y objetar la presentación de evidencia o de testimonios según reglas claramente definidas. “Nos hemos convertido en verdaderos custodios de la integridad legal del proceso judicial”, asegura Perla. ■

LA VENTAJA DEL JUICIO ORAL

“YA NO ESTÁBAMOS JUZGANDO GENTE”, recuerda René Hernández Valiente, magistrado de la Corte Suprema salvadoreña. “Estábamos juzgando papeles, legajos, cadáveres. No había contacto real entre el juez y la evidencia en un caso, en lugar de eso teníamos lo que algún empleado del tribunal había escrito sobre lo que pensaba que un testigo había dicho”.

Así resume un integrante del máximo tribunal de El Salvador las razones por las cuales se adoptó el juicio oral en los fueros de familia, de menores y penal. Para quienes trabajan en el sistema judicial, este ha sido uno de los aspectos más engorrosos de la reforma. A pesar de un significativo esfuerzo de capacitación y educación, la mayoría de los abogados y muchos de los jueces del país no estaban preparados o dispuestos a un cambio tan radical. La transición sigue marcada por la resistencia.

Sin embargo, los profesionales del derecho que han aprendido a adaptarse al procedimiento oral y lo usan a diario, claramente lo apoyan. Los partidarios más entusiastas se encuentran en las cortes de familia y de menores, que han estado usando el juicio oral desde hace cinco y cuatro años, respectivamente. Doris Luz Rivas, juez primero de menores en San Salvador, dice que el juicio oral ha fortalecido la credibilidad de los jueces al llevarlos a tratar más directamente con la ciudadanía. “Antes, algunos jueces delegaban todo y no aparecían ni siquiera para firmar la sentencia”, dice. “Ahora, el juez tiene que escuchar a cada joven, tiene que escuchar al fiscal y al defensor público y tiene que justificar su veredicto ante todas las partes”.

Además de hacer que el juez se responsabilice por sus decisiones, el juicio oral “concentra” el proceso judicial al forzar a todas las partes involucradas a reunirse en un momento y un lugar dados. Disputas que otrora requerían numerosos escritos ahora son resueltas de inmediato. Eso ha ayudado a reducir el plazo promedio de resolución de un caso penal de tres años a cuatro meses.

Según muchos abogados, el juicio oral también hace más difícil corromper el proceso. “El antiguo sistema estaba basado en amistades”, comenta Arístides Perla, el defensor público citado en la nota anterior. “Yo era un buen defensor si tenía amigos en el juzgado. No había control sobre la evidencia, ni sobre el proceso, ni sobre el juez, porque todo ocurría a puertas cerradas. En el juicio oral, la víctima, el acusado, el defensor, el fiscal y el juez se controlan unos a otros”.

Un nuevo panorama legal

Además de reemplazar los juicios actuados por el proceso oral, los nuevos códigos salvadoreños incluyen importantes cambios

ANTES

AHORA

Código penal



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ No se respetaban las garantías procesales básicas, los derechos constitucionales ni los tratados internacionales de derechos humanos. ▶ Permitía la prisión preventiva indefinida, aun en casos de delitos menores; castigaba todos los delitos con multas o prisión, sin tener en cuenta su gravedad. ▶ No tipificaba como delitos a la violencia doméstica, el hostigamiento sexual, el monopolio comercial, la desaparición forzosa y el lavado de dinero. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Garantiza el derecho a juicio, el debido proceso y la presunción de inocencia como lo estipulan la Constitución y tratados internacionales. ▶ Permite la libertad bajo fianza y limita la detención preventiva a 90 días; permite el arresto domiciliario, la libertad condicional y otras alternativas al encarcelamiento en casos de delitos menores. ▶ Especifica numerosos delitos, incluyendo la violencia doméstica, la tortura, la corrupción gubernamental, el lavado de activos y delitos ambientales. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Todos los delitos eran llevados a juicio, recargando el sistema con casos triviales. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Permite numerosas alternativas, como la conciliación, para tratar delitos menores. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ No contemplaba la figura de la asociación para delinquir. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Define instancias de complicidad criminal, permitiendo establecer grados de responsabilidad y combatir el crimen organizado. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Las víctimas participaban en forma limitada en los juicios. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Las víctimas tienen derecho a participar activamente en juicios y su testimonio es admisible como evidencia. |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rígidas normas sobre pruebas; en algunos casos se permitía inferir culpabilidad aun sin evidencia directa. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Define más ampliamente qué es evidencia; pone énfasis en la evidencia científica o hallada en la investigación. |

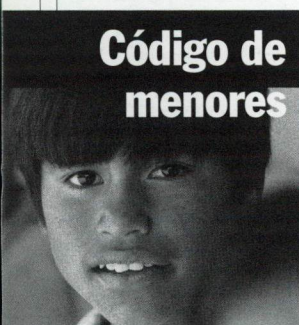
- ▶ No reconocía ni el concubinato ni los derechos de propiedad de los niños habidos de una unión de hecho.
- ▶ Favorecía a los maridos en las disputas matrimoniales por bienes gananciales o por custodia de menores.
- ▶ No establecía los derechos fundamentales de los menores de edad o de los ancianos, no especificaba la obligación del estado de proteger los derechos de la familia, el menor o el anciano.
- ▶ Permitía el divorcio sólo por causas contempladas en la ley y solía sancionar a uno de los cónyuges.

- ▶ Reconoce al concubinato y elimina toda la discriminación de los hijos basada en el estado civil de los padres.
- ▶ Otorga a hombres y mujeres iguales derechos y responsabilidades en el matrimonio, los bienes y la custodia de menores.
- ▶ Especifica los derechos fundamentales de los menores y los ancianos y establece el deber del estado de proteger a familias, menores de edad y ancianos.
- ▶ Permite el divorcio para disolver un matrimonio que ha terminado de hecho; faculta a los jueces a ponderar los motivos de los cónyuges.

Código de familia



Código de menores



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ No aplicaba un régimen legal especial a los delinquentes juveniles pese a que así lo exigía la Constitución desde 1950. ▶ No ofrecía a los menores de edad garantías procesales ofrecidas a los adultos. ▶ Consideraba a las conductas delictivas de los menores de edad como síntomas de una enfermedad que requería separarlos de la sociedad. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aplica un régimen legal especial a los menores de edad basado en principios modernos y en convenciones internacionales. ▶ Ofrece a los menores la mayoría de las garantías procesales que gozan los procesados adultos. ▶ No considera a la conducta delictiva de los menores como una enfermedad; pone énfasis en la reeducación mediante métodos alternativos al confinamiento. |
|--|---|

¿Cuánto cuesta ese diploma?

Reformas revelan la necesidad de mejorar la educación de abogados y funcionarios



"EL DÍA QUE ESE CÓDIGO ENTRE EN vigencia, yo renunció".

Según el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, Rafael Durán Barranza, así le anunció sus intenciones un veterano jurista salvadoreño cuando comenzó a debatirse un nuevo código penal.

Tales reacciones echan luz sobre uno de los aspectos más delicados de los programas de reforma judicial: la falta de voluntad y capacidad entre los profesionales del derecho para adaptarse a los cambios. En El Salvador, la resistencia era comprensible. Primero, había desacuerdos filosóficos legítimos sobre la estrategia de reforma que escogió el gobierno. Segundo, los nuevos procedimientos penales transfirieron una significativa cuota de autoridad de los jueces y la policía a los fiscales y defensores (ver página 16). Para jueces, abogados y policías, la reforma también implicó la necesidad de aprender de golpe a aplicar correctamente todo un conjunto de leyes y procedimientos. "Cuando la gente ha estado trabajando de cierta manera durante muchos años, esto es muy difícil", explica José Albino Tinetti, director de la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.

Consciente de que la capacitación sería un componente crucial de la reforma, en los años ochenta el gobierno salvadoreño comenzó a invitar a juristas extranjeros para dictar seminarios. "El objetivo era simplemente ponernos en contacto con nuevas formas de ver las cosas", recuerda Tinetti. Las reformas constitucionales aprobadas en 1991 colocaron bajo la jurisdicción del Consejo a su institución, que por ese entonces era una naciente escuela judicial, y le encomendaron la elaboración de una estrategia para capacitar a jueces, fiscales, abogados y policías.

En ese tiempo, el mero concepto de una escuela judicial era casi revolucionario. "En el pasado nunca había habido ningún tipo de capacitación para jueces", dice Durán. En la actualidad, la Escuela Judicial salvadoreña es una de las instituciones más avanzadas de su tipo en América Latina. Ofrece una variedad de cursos y talleres prácticos que abarcan desde teoría constitucional a técnicas efectivas de presentación oral.

“ Los problemas del sistema judicial comienzan en las aulas universitarias. ”

BEATRICE ALAMANNI DE CARRILLO
Federación de Asociaciones
de Abogados de El Salvador

Los cursos han sido profusamente elogiados por profesionales que los han tomado. Pero la escasez de recursos significa que sólo algunos de los profesionales principalmente los radicados en la capital han podido asistir a esos cursos. Aunque la escuela publica manuales para apoyar a quienes no han podido asistir personalmente a clases y está preparando un sitio de Internet para ofrecer capacitación a distancia, muchos funcionarios judiciales en el interior del país se sienten pasados por alto.

Desde la facultad. Algunos críticos de la reforma sostienen que, en última instancia, las fallas en la educación y la capacitación condenan a este esfuerzo al fracaso. Felipe Umaña, asesor legal de la principal asociación

de empresas privadas de El Salvador, esgrime la nueva categoría de delitos ambientales como ejemplo. "Esta clase de delito requiere un examen muy sofisticado de evidencia científica de cosas como sustancias contaminantes en el aire, pero nuestros jueces no están de ninguna manera preparados para eso", asegura.

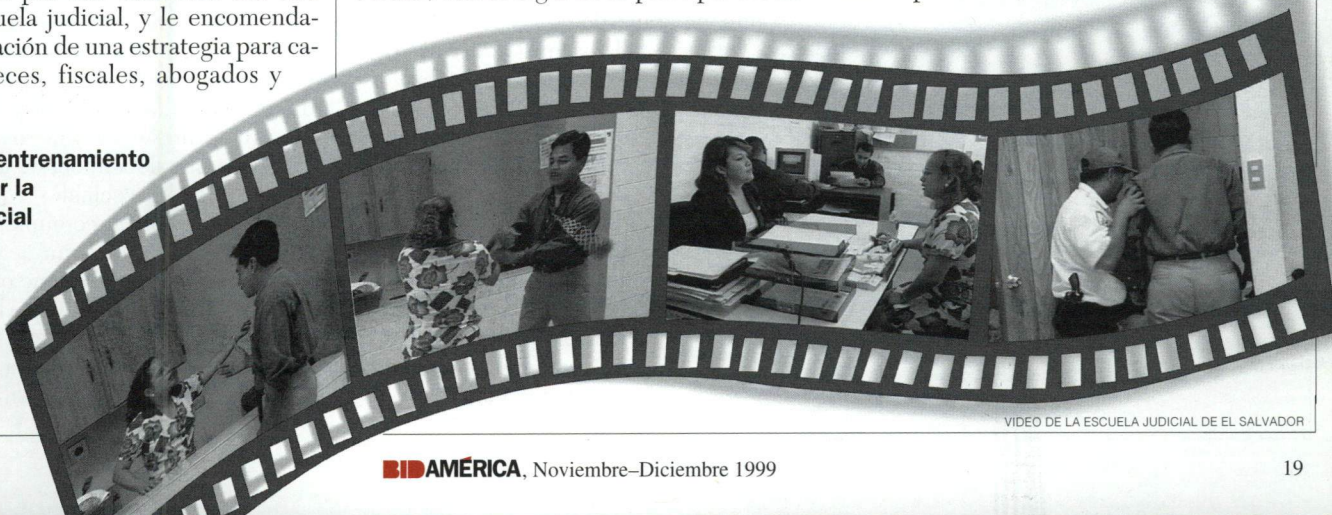
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, Beatrice Alamanni de Carrillo, quien fuera decana de la facultad de derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), tiene un diagnóstico aún más sombrío. "Los problemas del sistema judicial comienzan en las aulas universitarias", dice. En los últimos años han proliferado las facultades de derecho en El Salvador, brindando enseñanza inadecuada y graduando muchos más abogados de los que el país necesita o puede absorber, afirma.

La jefa del departamento de ciencias jurídicas de la UCA, Emma Dinorah Bonilla de Alvear, coincide con su colega en que las universidades deben esforzarse en el desarrollo de las "facultades críticas" de los estudiantes. Pero Bonilla apunta que las facultades de derecho también están bajo presión para actualizar sus programas de estudios de manera que los estudiantes tengan al menos una capacidad básica de trabajar con los nuevos códigos y procedimientos.

Alamanni y otros advierten asimismo que los requisitos para practicar la abogacía en El Salvador son excesivamente básicos. "Los estudiantes comienzan a aprender derecho a los 16 ó 17 años y se gradúan a los 21 ó 22. No hay examen profesional. Simplemente presentan su diploma a la Corte Suprema y quedan autorizados para ejercer la abogacía. Me parece sumamente irresponsable poner la vida de ciudadanos en las manos de estos jóvenes."

Según Alamanni, parte de la culpa por esta situación recae en los propios abogados, que han resistido los intentos de colegiación en una institución independiente que velaría por la integridad de los miembros de la profesión. "Nosotros los abogados necesitamos aprender a velar por nuestra profesión, a fijar normas, a autoestimarnos y autodepurarnos", afirma.

Un video de entrenamiento producido por la Escuela Judicial ilustra cómo interviene el sistema judicial en una disputa hogareña.



VIDEO DE LA ESCUELA JUDICIAL DE EL SALVADOR

¿Justicia para quién?

Las reformas provocan debate sobre derechos de víctimas y delincuentes



ERNESTO ROSALES BONILLA, UN INGENIERO eléctrico de 27 años, fue secuestrado cerca de su casa en Soyapango, un modesto suburbio de San Salvador, la noche del 7 de julio de 1999.

Su cadáver maniatado apareció cuatro días más tarde a la vera de una carretera, en las afueras de la capital. Había sido torturado y baleado cinco veces en la cabeza. Tal vez porque Rosales trabajaba para El Diario de Hoy, un importante periódico salvadoreño, su muerte ocupó los titulares por un día.

Para la opinión pública salvadoreña, casos como este eclipsan los logros de la reforma judicial. A ocho años de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador sigue marcado por la violencia. Los barrios marginales de San Salvador viven aterrorizados por pandillas conocidas como maras que controlan vecindarios enteros y mantienen vínculos con organizaciones criminales en Los Angeles y otras ciudades de Estados Unidos. Aunque se cree que la situación ha mejorado en años recientes, en 1996 el Consejo Nacional de Seguridad Pública registró 6.972 homicidios en El Salvador, un promedio de 19 homicidios diarios en un país con sólo 6 millones de habitantes. Según el propio consejo, sólo se efectuaron 415 arrestos por esos homicidios y menos de una cuarta parte de esas detenciones resultaron en condenas.

Aunque no se dispone de estadísticas comparables para el período que siguió a la implementación del nuevo código penal de El Salvador, está claro que las mejoras se materializan muy lentamente. Quienes critican la reforma judicial esgrimen ese hecho para responsabilizar al nuevo código penal por la persistente actividad delictiva y la impuni-

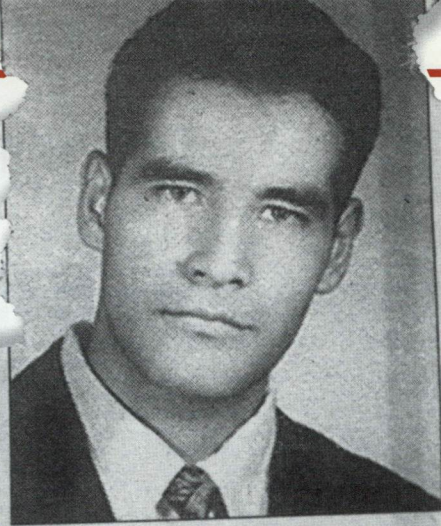
dad. La prensa ha caracterizado a las nuevas leyes como "hechas en Suiza" y completamente inadecuadas para la realidad social "tropical" de El Salvador. Asimismo, sostiene que la policía se ve restringida para actuar debido a las nuevas garantías procesales. En una encuesta de opinión realizada por la firma Gallup entre 1.200 salvadoreños entre agosto y octubre de 1999, siete de cada 10 de los consultados dijeron creer que las leyes protegen más a los delincuentes que a las víctimas.

Para los defensores de las reformas, esas críticas reflejan una confusión fundamental en torno a las causas del delito. "Alguna gente cree que el delito es consecuencia de una falta de represión", apunta la legisladora Lorena Peña. "Nosotros pensamos que el delito es causado por las condiciones sociales y económicas en que vivimos. Porque seamos pobres no significa que debamos tener un sistema judicial de la Edad Media".

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Francisco Rodolfo Bertrand Galindo, cree que el sentimiento popular contra las nuevas leyes se debe en parte a que la reforma no fue explicada adecuadamente al público. "La reforma va más allá de esta cuestión de leyes", dice. "Tiene que ver con jueces, fiscales, con la policía y sus procedimientos. De manera que cuando falla, se puede deber a cualquiera de esas cosas."

Es más, el nuevo código penal salvadoreño no es tan tolerante como sostienen sus críticos. Permite confesiones extrajudiciales, a pesar de que organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que éstas suelen ser extraídas mediante torturas. Además, la Asamblea Legislativa aprobó en septiembre un aumento generalizado de las penas máximas y la expansión del uso de la detención preventiva.

El verdadero dilema, según muchos observadores, es que los problemas sociales salvadoreños exceden los recursos de las instituciones públicas. Por ejemplo, antes de ser llevados ante un



Ernesto Rosales Bonilla

JOVEN ASESINADO.

Empleados de una funeraria

trasladados

El homicidio de Rosales sigue impune.

juez, casi todos los detenidos salvadoreños quedan en manos de la Policía Nacional Civil. Esta fuerza del orden, creada en el marco de los acuerdos de paz, incluye en sus filas a miles de ex soldados y guerrilleros.

Aunque se han hecho enormes progresos en la capacitación y reeducación de la policía, su capacidad investigativa es muy limitada. A menudo no existen los recursos necesarios para obtener y analizar evidencia, encontrar testigos y efectuar autopsias apropiadas. Lo mismo se puede decir de las cárceles: aunque las nuevas leyes incluyen claros mandatos para la rehabilitación de reclusos, la falta de fondos mantienen en la teoría a la mayoría de esas reformas.

A largo plazo, el peligro que corren las reformas judiciales en El Salvador es que generen expectativas de justicia que no se puedan satisfacer en la realidad. "Nos sentimos muy orgullosos del marco judicial e institucional que hemos construido", dice María Teresa de Mejía, del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. "Las nuevas leyes hacen posible que cada uno pueda reclamar sus derechos. Pero, ¿qué pasa si no podemos satisfacer esos reclamos?"

El actual gobierno salvadoreño está empeñado en impedir que esa frustración ocurra. Ha anunciado planes de un Proyecto para la Prevención Social del Delito que pondrá énfasis en la educación pública, programas juveniles y un nuevo concepto de vigilancia que dependerá de la cooperación entre entidades vecinales y patrullas policiales basadas en las comunidades.

Benjamín Cuéllar, un activista por los derechos humanos, sostiene que esa cooperación es precisamente lo que hace falta. "La única forma de evitar que esta rueda dé marcha atrás es conseguir que la gente confíe, participe y empuje en la misma dirección".

¡Mejoremos Nuestro Sistema de Justicia!

"Pongamos de moda La Virtud"

José Martí 1892

Campaña Cívica ASA Posters.

Carteles convocan a los salvadoreños a apoyar la reforma judicial.

Deciden los aldeanos

En las montañas de Guatemala se superponen al lodo, al aislamiento y a 36 años de guerra

Por CARLOS GONZALEZ, Guatemala

CON EL LODO HASTA LOS EJES, LA camioneta avanzó a los tumbos por la calle principal de Nueva Catarina, una de tantas aldeas perdidas en la Sierra de los Cuchumatanes, en el norteño departamento guatemalteco de Huehuetenango. Eventualmente llegó a su destino, donde una cuadrilla de trabajadores cavaba una zanja de desagüe. Uno de ellos se acercó a los visitantes.

"Va despacio", explicó Hernando Delgado, miembro de la Entidad Representativa Microrregional, organizadora del proyecto. El problema eran las piedras. "Cuando son demasiado duras o pesadas para levantarlas con pico y pala, tenemos que usar dinamita", dijo. Como estaban trabajando cerca del pueblo, esa tarea debía hacerse con mucho cuidado y usando cargas precisas.

El trabajo es duro e impago, las jornadas son largas. De todas formas, los hombres que empuñan los picos y palas mantienen su entusiasmo, porque se trata de su propio proyecto. Como otras 92 comunidades en todo

el ámbito de este país desgarrado por décadas de guerra civil, Nueva Catarina ha recibido fondos y asistencia técnica por medio de una iniciativa financiada por el BID llamada Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz (DECOPAZ). El programa, que está contribuyendo a reconstruir la infraestructura y a reparar el tejido social tras 36 años de conflicto armado, enrola la cooperación de las comunidades en una medida sin precedentes. Los vecinos forman sus propias organizaciones, toman las decisiones en cuanto a los proyectos y usan los fondos provistos por el programa para contratar servicios y formar cuadrillas de trabajo. A menudo analfabetos y carentes de experiencia en este tipo de responsabilidades, los vecinos dependen mucho de los cursos de capacitación y de la supervisión ofrecida por un grupo de organizaciones que cooperan con el programa, incluyendo CARE, la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos y el Centro Canadiense para la Cooperación y los Estudios Internacionales.

El proyecto de desagüe es el segundo que se lleva a cabo en Nueva Catarina. El prime-

ro, ya completado, trajo agua corriente a la comunidad. "Al comienzo, algunas familias se oponían a ese proyecto", recordó Gaspar Cardona, un vecino de la comunidad. "Pero ahora tenemos agua en todas las casas y quienes antes dudaban ahora trabajan en el nuevo sistema de desagüe".

Terminada la visita a Nueva Catarina, el vehículo siguió subiendo por el camino de montaña, donde un manto permanente de neblina cubre las cimas. Es aquí donde se fabrican las famosas telas tradicionales de Guatemala. Los residentes hablan antiguas lenguas mayas, como jacalteco, q'anjobal y mam. Las distancias que separan a las comunidades pueden ser pequeñas, pero la precariedad del camino alarga la travesía.

La aldea de Mangalitos está a menos de un kilómetro de la ruta, pero sólo se puede llegar allí a pie. Hasta hace sólo dos meses, ocho de las familias de la comunidad vivían en chozas hechas de palos y paja.

El problema del agua. Aún más arriba, a 3.500 metros de altura, los habitantes de Tuisoch no pueden cultivar maíz y frijoles debido al frío y a la falta de lluvia. En lugar de eso producen papas y crían ovejas y otros animales.

Los aldeanos de Tuisoch decidieron que la falta de agua era para ellos el problema más persistente. El arroyo más cercano queda a dos kilómetros, apunta Javier Pablo, un miembro de la filial local de la Entidad Representativa Microrregional. Las familias tenían que hacer de dos a cuatro viajes al día para aprovisionarse de agua.

La aldea optó por una solución simple pero efectiva para capear la estación seca anual: construir tanques en el techo de las casas de las 70 familias participantes para almacenar agua de lluvia. Tras pasar por filtros, el agua llega a grifos.

Un mejor suministro de agua es sólo el beneficio más visible del proyecto, asegura Pablo. "Igualmente importante fue aprender a unirnos para beneficio de toda la comunidad", afirma. "Administramos el presupuesto, contratamos las firmas para hacer el trabajo y suministramos la mano de obra. Nos sentimos muy orgullosos".

Esos beneficios intangibles son en muchos sentidos los resultados más significativos del programa. Mancomunarse en torno a proyectos comunitarios ayuda a superar sospechas y hostilidades hondamente enraizadas en años de guerra civil. Aunque el programa recién comienza, las rivalidades entre paramilitares, guerrilleros, refugiados y personas desplazadas parecen estar desvaneciéndose. De la misma manera, la desconfianza hacia los organismos de gobierno, las instituciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales está cediendo paso a relaciones más cooperativas.

Un dirigente de la comunidad lo definió así: "Estamos realmente contentos de que nos estén ayudando a mejorarnos. Trabajando juntos mejoraremos nuestras vidas". ■



El suelo dificulta la labor y la proximidad de las casas hace peligroso usar dinamita.



Le presento a mi amigo Jackson: otrora tolerada como un costo de hacer negocios, la corrupción hoy es vista como perjudicial.

Antídoto para la corrupción

PROBABLEMENTE HOY NADIE RECLAME paternidad intelectual sobre la idea, pero pocas décadas atrás había académicos que sostenían que la corrupción era buena para el crecimiento económico. En ese entonces, la percepción prevaleciente era que los sobornos ayudaban a la gente de negocios a sortear barreras administrativas y a agilizar la labor de los burócratas, incentivándolos a trabajar.

Paulo Mauro, un economista italiano educado en Harvard y Oxford que trabaja en el Fondo Monetario Internacional, trajo a la memoria esa antigua creencia en una charla en septiembre en el Foro de las Américas del BID sobre la corrupción.

El mundo ha tomado desde entonces una visión mucho menos apacible de este fenómeno. Hoy en día la corrupción es una preocupación primordial en América Latina y el Caribe, junto con el delito y el desempleo.

Mauro, quien lleva años estudiando este fenómeno desde el punto de vista económico, dijo que una revisión de recientes estudios empíricos indica que la corrupción podría perjudicar seriamente a la economía, desalentando la inversión, limitando el crecimiento y distorsionando el gasto público. Un país que tiene éxito en reducir la corrupción y en pulir su imagen puede cosechar considerables beneficios. Según Mauro, una

nación que avanza un sólo peldaño en una escala donde 0 representa la corrupción más completa y 10 la honestidad más inmaculada podría aumentar su tasa de crecimiento económico en 0,25 por ciento del producto bruto interno.

Gran parte de la corrupción se debe al poder económico reservado a políticos y burócratas. La literatura económica ha señalado a las restricciones al comercio, los subsidios gubernamentales, los controles de precios, las tasas cambiarias múltiples y los monopolios legales como potenciales fuentes de sobornos, fraudes y favoritismos.


Durante la década pasada, muchos países recurrieron a políticas de liberalización, desregulación y privatización para mejorar sus economías, confiando en que un beneficio adicional sería limitar las oportunidades para lucrar ilegalmente. Pero no todos los países se han apresurado a adoptar esa política, ni se ha desvanecido la preocupación pública en torno al problema. América Latina es considerada en general como una región con un nivel de corrupción más alto que el promedio mundial. No obstante, Mauro advierte que los índices de corrupción tienen limitaciones debido a la naturaleza subjetiva de buena parte de la información empleada para prepararlos. Por ejemplo, los índices no distinguen entre la corrupción al más alto nivel (un ministro de defensa sobornado para decidir la compra de aviones) y la corrupción más pedestre (un policía que acepta dinero para perdonar una infracción

de tránsito). Tampoco diferencian entre la corrupción bien organizada (donde los corruptos cumplen con lo que prometen) y la corrupción caótica (donde un soborno no garantiza la obtención de lo pedido).

De todas formas, Mauro ha encontrado que la corrupción prevalece más en países donde existe inestabilidad política, barreras burocráticas y sistemas judiciales y legislativos débiles. La evidencia empírica indica que países con gobiernos democráticos, libertad de prensa y sistemas educativos con buenos presupuestos y de buena calidad tienden a tener niveles más bajos de corrupción.

Sus conclusiones: si un país quiere acabar con la corrupción, no puede tomar medidas graduales. Una de las claves es asegurar la transparencia fiscal evitando las transferencias fuera de presupuesto y los mecanismos opacos de asignación presupuestaria.

—Peter Bate

 Los artículos de Paulo Mauro sobre corrupción pueden verse en www.imf.org.

Las crisis y el sector privado

EL ESCENARIO SE DA CUANDO UN PAÍS O una región enfrentan una inesperada crisis de deuda o de liquidez, como ocurrió en México a fines de 1994. El sector privado hace las primeras movidas, tomando decisiones como la postergación de inversiones o retiro de capital que pueden sacudir la economía del país en crisis, de la región o incluso del mundo entero. A esa altura, instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID en-

tran en acción para armar paquetes de rescate mientras la nación afectada acepta implementar medidas de estabilización y reforma.

Superada la emergencia, surge un tema crucial, cómo hacer que el sector privado, siempre listo a salir de un país cuando percibe riesgos o retrocesos, regrese cuando la situación se ha normalizado.

Entrada y salida

El proceso de "compartir la carga", en el cual los sectores público y privado se suman para rescatar a naciones que han caído en una espiral financiera, fue el tema de un reciente encuentro de ministros de hacienda y presidentes de bancos centrales de América Latina celebrado en la sede del BID.

El concepto no es fácil de abordar. Las autoridades de gobierno sostienen que, dado que la comunidad inversora privada seguramente se beneficia cuando se logra organizar un paquete de rescate con fondos públicos, tanto el sector privado como el público deben compartir los costos de la estabilización. Los banqueros y las instituciones financieras privadas escuchan con simpatía esos argumentos, pero en última instancia es la presión de los inversores lo que determina mayormente qué medidas se tomarán para preservar su capital.

Los participantes en el encuentro convocado por el BID advirtieron contra la tentación de establecer mecanismos participativos concretos, subrayando la naturaleza voluntaria de cualquier arreglo en ese sentido para evitar reacciones adversas. Un país que procura curarse en salud debe hacerlo con gran discreción. De otra forma puede crear la impresión de una inminente incertidumbre y provocar el tipo de estampida financiera que busca evitar.

Uno de los mecanismos sugeridos por los expertos fue la concertación voluntaria de contratos de deuda que faciliten las negociaciones en caso de una crisis.

Otra forma de promover la estabilidad es permitir más flexibilidad en el uso de líneas de crédito contingentes establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Otra es establecer nuevas normas financieras más adecuadas a América Latina, especialmente las referidas a los requisitos de capital que fija el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Los participantes propusieron asimismo seguir estudiando la posibilidad de asignar al FMI un papel como prestamista internacional de último recurso.

—Daniel Drosdoff



Un trabajo sobre este tema del economista del BID Eduardo Fernández-Arias está disponible en el sitio web del Banco (www.iadb.org). Realice una búsqueda con el título *International Initiatives to Bring Stability to Financial Integration*.

Lecciones del "Y2K"

Al margen del resultado, se aprenderá la importancia de prepararse para emergencias

Por PAUL CONSTANCE

¿COMO RECORDAREMOS AL PROBLEMA informático del año 2000? ¿Como un burdo ejemplo de exageración periodística o un caso de monumental negligencia ante un inminente desastre?

En las últimas semanas de 1999, abundaban predicciones contradictorias en torno al "Y2K", como se conoce al problema que tendrían ciertos programas de computación para reconocer correctamente fechas terminadas en 00, como el año 2000.

Aunque nunca se conocerán cifras precisas, expertos de la industria del software calculan que gobiernos y empresas habrán gastado decenas de miles de millones de dólares en todo el mundo para asegurarse de que sus computadoras continuarán funcionando correctamente cuando los dígitos correspondientes a los años pasen de 99 a 00 en el primer segundo del 2000. Es una suma difícil de creer, pero el propio BID es un buen ejemplo. Con menos de 2.500 empleados, el Banco es una institución pequeña en términos comerciales; sin embargo le costó 17 millones de dólares preparar sus computadoras y sistemas de telecomunicaciones e infraestructura para afrontar el Y2K. Grandes bancos privados gastaron entre 200 y 600 millones de dólares cada uno.

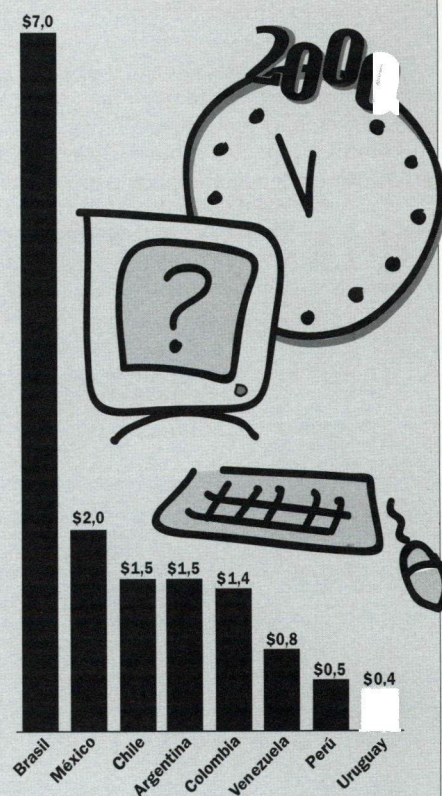
América Latina y el Caribe gastaron poco en comparación a lo desembolsado en Europa y Estados Unidos, pero es impresionante de todas formas. Lee Tablewski, un investigador asociado del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, ha estado siguiendo de cerca el Y2K en América Latina y el Caribe desde hace años. Sobre la base de conversaciones con los coordinadores nacionales de prevención del Y2K en los ocho países mencionados en el gráfico de la derecha, Tablewski calcula que la región gastó por lo menos 15.000 millones de dólares en prepararse para enfrentar el Y2K.

Gran parte de esa suma fue invertida en consultores y fabricantes de software especial, que realizaron la tediosa tarea de revisar línea por línea los programas informáticos en busca de códigos defectuosos para modificarlos y subsecuentemente ponerlos a prueba. Muchas empresas y entidades optaron por adquirir nuevas computadoras y programas, en vez de modificar los antiguos. En ese aspecto, el Y2K podría haber traído beneficios inesperados. "No hay duda de que ayudó a modernizar la infraestructura de las

organizaciones que planearon con anticipación", sostiene Ricardo Miranda, coordinador del esfuerzo del BID para capear el Y2K.

Según Miranda, el Y2K será recordado con el proverbial "no hay mal que por bien no venga" cuando se considere que obligó a empresas y gobiernos a reconocer su interdependencia y a pensar seriamente en la prevención de desastres. "Hay ciertas redes de datos, como las que controlan los sistemas de teléfonos y el tráfico aéreo, que son inherentemente globales", apunta. "Cada país que forma parte de la red tiene que estar preparado. Pero el Y2K ha mostrado que en algunas áreas no estamos listos para responder rápidamente ante una crisis grave. No tenemos siquiera uno por ciento de los planes de contingencia necesarios para estas situaciones. Ahora estamos un poquito mejor y ese es un saldo positivo".

EL PRECIO DE LA PREVENCIÓN



Gasto público y privado, estimado en miles de millones de dólares, en medidas para evitar problemas informáticos vinculados al Y2K.

FUENTE: CENTRO NORTE-SUR DE LA UNIVERSIDAD DE MIAMI

Estilo antiguo en el Nuevo Mundo

La pintura venezolana del siglo XIX no oculta su francofilia

Por ROGER HAMILTON

CUALQUIERA QUE SE DETENGA UN MINUTO en la galería de arte del Centro Cultural del BID en Washington, rodeado de pinturas venezolanas del siglo XIX, podría sentirse como transportado a Francia.

Con la excepción de varias encantadoras pinturas primitivas de comienzos de ese siglo, la exposición "Figuras Destacadas de la Pintura Venezolana del Siglo XIX" es testimonio del grado en que la élite venezolana, como otras en América Latina, admiraba a Francia como modelo intelectual y cultural.

Pero eso ocurriría más tarde. Durante los primeros años del siglo, la pintura venezolana se practicaba de forma casi artesanal, evidenciando poco conocimiento

de la perspectiva, la proporción y la sombra. El género predominante en esos tiempos era el retrato, junto con la representación de temas históricos y mitológicos.

Los horizontes artísticos venezolanos se ampliaron después de que el país alcanzó la independencia. Inspirados en parte por las crónicas del sabio alemán Alexander von Humboldt, muchos escritores, científicos, exploradores y artistas foráneos llegaron a Venezuela con ideas novedosas. Los artistas empezaron a explorar nuevos temas como el paisaje y las escenas locales.

La influencia extranjera aumentó durante la década iniciada en 1840, cuando Venezuela entró en un período de prosperidad. El teatro y la fotografía hicieron su aparición y comenzó a dictarse instrucción artística formal en diversas instituciones, incluyendo la Academia de Bellas Artes. Las artes avanzaron aún más después de que el caudillo liberal Antonio Guzmán Blanco llegó al poder en 1870. Guzmán Blanco es considerado tanto un autócrata como una fuerza civilizadora. Remodeló a Caracas con París como inspiración y supervisó la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Becó a jóvenes artistas para estudiar en París y Roma. En particular, los estudios en la Academia de París eran considerados casi obligatorios.

La fotografía hicieron su aparición y comenzó a dictarse instrucción artística formal en diversas instituciones, incluyendo la Academia de Bellas Artes. Las artes avanzaron aún más después de que el caudillo liberal Antonio Guzmán Blanco llegó al poder en 1870. Guzmán Blanco es considerado tanto un autócrata como una fuerza civilizadora. Remodeló a Caracas con París como inspiración y supervisó la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Becó a jóvenes artistas para estudiar en París y Roma. En particular, los estudios en la Academia de París eran considerados casi obligatorios.

Política y retratos. Uno de los más brillantes, versátiles y prolíficos exponentes del estilo académico francés en Venezuela, Arturo Michelena, recibía constantes comisiones para llenar las amplias y desnudas paredes de los edificios públicos con escenas épicas de la historia nacional. Su talento también fue utilizado por la Iglesia. Entre sus obras religiosas figuran "La Última Cena", encargada para la Catedral de Caracas. Trabajos más íntimos, tales como su "Retrato de Emilia Alcalá", también demuestran el talento de este maestro finisecular.

Durante este período, una generación en-

tera de artistas recibió encargos del gobierno para decorar edificios públicos. Los pintores, que trabajaban el estilo académico, produjeron numerosas representaciones a héroes nacionales y otras figuras ilustres. La Iglesia reanudó su patrocinio de las artes y los encargos privados daban otra fuente de ingresos.

Si bien las artes florecieron, la aceptación a ciegas del modelo extranjero afectó la visión interpretativa del artista venezolano y los temas que escogía pintar. El resultado, según el curador del Centro Cultural del BID, Félix Angel, fue un divorcio entre el arte y la realidad social. De hecho, recién a fines del siglo apareció un artista, Emilio Boggio, con una visión fresca de la función del arte. Así nació un movimiento que representaba más fielmente cómo vivían realmente los venezolanos de la época.

El estilo académico francés prevaleció hasta 1909, cuando los estudiantes de la Academia de Bellas Artes venezolana iniciaron una huelga contra los obsoletos métodos de instrucción. Marián Caballero, curadora de arte del siglo XIX en la Galería de Arte Nacional de Venezuela, escribió en el catálogo que acompañó la exposición del BID que la huelga de los estudiantes marcó un punto de partida, abriendo el camino para una exploración de la pintura de paisajes, cambios en los colores de la paleta y el uso de la luz natural.



"Retrato de Emilia Alcalá", de Arturo Michelena.



Detalle de "La Partida hacia el campo", de Emilio Boggio.





"Los cazadores a caballo en la posada", de Celestino Martínez (arriba).
Detalle de "La joven madre", de Arturo Michelena (abajo).



DAVID MANGURIAN—BID

Cuatro Manos, Un Piano

Es sorprendente cómo el teclado de un piano puede acomodar cuatro manos, especialmente las de virtuosos como Steven y Stijn Kolacny. Pero estos dos hermanos han afilado juntos sus destrezas desde una muy temprana edad. Sus extraordinarios talentos fueron apreciados durante un reciente recital en el Centro Cultural del BID. Dado que los hermanos son paladines de la interpretación de compositores flamencos contemporáneos, su actuación en el BID incluyó una pieza de Westerlinck, además de selecciones de Schubert, Ravel, Brahms, Satie y Dvorak.

Una vocación juvenil

Uno de los principales grupos musicales de Washington, el Conjunto de Cuerdas de la Sinfónica de Cámara de Washington, ofreció un recital en septiembre ante una audiencia que llenó el auditorio del BID. La orquesta de 35 integrantes se esfuerza por llegar al público joven, que representa una tercera parte de su audiencia anual de 15 mil personas.

Para amantes de la guitarra

Los aficionados a la guitarra clásica estuvieron de parabienes en octubre cuando no uno sino cuatro maestros del punteo tocaron en el BID. El cuarteto asturiano Entre-Quatre ha logrado considerable éxito entre los devotos de la música de cámara contemporánea. El grupo ha estrenado más de 30 composiciones creadas especialmente para ellos. Su interpretación de obras de seis compositores españoles recibió una entusiasta respuesta por parte de la audiencia del BID.



DAVID MANGURIAN—BID

PROGRESOS

ECUADOR

Astillero giratorio

EL ASTILLERO DEL INGENIERO ecuatoriano Antonio Labra en Guayaquil no iba ni para atrás ni para adelante. Su dique seco de un solo carril sobre el río Guayas sólo le permitía reparar un barco a la vez. Las ganancias de su empresa, Asenabra, se estaban secando.

La alternativa obvia, construir más carriles, era demasiado cara porque la ribera del Guayas se caracteriza por ser poco profunda y fangosa. Se necesitarían docenas de pilares de cemento reforzado de 15 metros para soportar los 200 metros de carriles que se requerían.

Entonces Labra recordó que las empresas de ferrocarriles reparan varias locomotoras simultáneamente llevando las máquinas a talleres con enormes plataformas giratorias llamadas tornamesas.

El único carril apuntalado del que disponía Labra servía para sacar barcos del agua. Todo lo que necesitaba ahora era construir una tornamesa. Pero hay una gran diferencia entre una plataforma giratoria de ferrocarril y una para barcos: las locomotoras pesan entre 20 y 25 toneladas; los barcos de pesca pueden pesar más de 250.

El proyecto costaría 400.000 dólares. Asenabra necesitaba un financiamiento a largo plazo por 280.000 dólares, pero la mayoría de los bancos ecuatorianos no estaban en condiciones de otor-



Una plataforma giratoria permite a este astillero ecuatoriano reparar más de un barco a la vez.

garle condiciones convenientes. La excepción fue un banco especializado en préstamos a la pequeña y mediana empresa y a la agroindustria. Ese banco había recibido un préstamo de 3 millones de dólares e inversiones de capital de la Corporación Interamericana de Inversiones, una entidad afiliada al BID que trabaja con el sector PYME.

La tornamesa de Asenabra empezó a operar en 1998. Funcionarios de la compañía creen que es la primera de su tipo en América Latina y quizás en el mundo.

Pero la historia tuvo un final agri dulce. A diferencia de lo esperado, la plataforma giratoria no aumentó las ganancias de Asenabra. Unos meses después de completarse el proyecto, Ecuador cayó en una profunda recesión. Los dueños de embarcaciones se han visto obligados a gastar menos en mantenimiento, señala el jefe de producción de Asenabra, Napoleón Cabrera. Pero la tornamesa ha permitido a la compañía trabajar con más barcos a la vez, lo cual probablemente la haya salvado de irse a pique.

—David Mangurian



Listo para navegar.

NUEVOS PROYECTOS

REGIONAL

Prevención para El Niño

UN PRIMER PASO PARA DESARROLLAR un sistema de alerta temprana para reducir el impacto del fenómeno climático de El Niño en América Latina y el Caribe será ejecutado por la Organización Mundial de Meteorología (WMO, por sus siglas en inglés).

El programa analizará las capacidades de las agencias meteorológicas nacionales e indicará con precisión aquellas áreas y grupos de poblaciones más vulnerables a las inundaciones y las sequías causadas por El Niño.

El BID contribuirá 998.000 dólares del Fondo Especial Japonés para apoyar el programa, que tiene un costo total de 1.538.000 dólares.

El más reciente episodio de El Niño, entre 1997 y 1998, causó serios problemas a lo largo de la región. Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú declararon estados de emergencia a causa del fenómeno.

El nuevo programa incluirá medidas para mejorar los sistemas de pronóstico del tiempo y para aumentar la capacidad de las agencias gubernamentales para mitigar los efectos de los desastres naturales y suministrar servicios de rescate.

Las instituciones que participarán en el programa son el International Food Policy Research Institute, el International Research Institute for Climate Prediction y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El nuevo programa fue inspirado por un estudio del Instituto Nacional Meteorológico de España y consultores estadounidenses, canadienses y latinoamericanos sobre formas para mejorar el pronóstico del tiempo a corto y mediano plazo.

BRASIL

Preservación del patrimonio urbano

CUATRO EJEMPLOS SOBRESALIENTES del patrimonio urbano de Brasil recibirán apoyo como parte de un nuevo programa para preser-



var la riqueza cultural del país.

Además de proyectos específicos de inversión, el programa ayudará a Brasil a desarrollar una estrategia amplia para la preservación de su patrimonio, incluyendo medidas para modernizar el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional. El BID apoya el programa con un préstamo de 62,5 millones de dólares. Las inversiones iniciales serán destinadas a:

► Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, punto central de la fiebre del oro del siglo XVIII. El oro se agotó pero quedaron muchas iglesias, puentes y fuentes históricas.

► Olinda, a poca distancia del centro de Recife, y uno de los complejos más importantes de arquitectura colonial en Brasil.

► Bairro do Recife, la isla donde nació la ciudad nordestina de Recife. Hasta hace poco se encontraba en ruinas y era considerada peligrosa, pero ahora está siendo transformada en un lugar pintoresco para visitar de día y un sitio con ambiente para salir de noche.

► Plaza Tirandentes, un vecindario de edificios históricos en Río de Janeiro que, según sus

promotores, se puede convertir en algo similar al Soho en Nueva York.

Los proyectos de inversión incluirán la restauración de monumentos, la reparación de calles, aceras y estacionamientos; así como incentivos para que los dueños de edificios reparen estructuras. También se realizarán una serie de actividades experimentales para promover la inversión por parte de firmas privadas y lograr la participación de los vecinos y de organizaciones no gubernamentales.

El programa asimismo incluirá el entrenamiento de artesanos, agentes culturales y de turismo e instructores.

Brasil tiene una gran riqueza de sitios históricos con un enorme potencial cultural y económico. Pero de los 800 lugares reconocidos por su significado histórico, sólo 20 por ciento está en buenas condiciones. Otro 40 por ciento se encuentra en condiciones deficientes y un 10 por ciento está en ruinas.

En la mayoría de los casos, los edificios se deterioraron porque ya no cumplían un propósito que justificara su mantenimiento y la preservación de sus características históricas y artísticas. Por dar un ejemplo, es difícil que hoy en día una ciudad de 100.000 habitantes necesite 50 iglesias.

Otra de las razones fue la incapacidad del sector público para cuidar los edificios y la falta de contratistas y artesanos con destreza para reparar edificios históricos. Por ejemplo, el uso de pintura al látex impermeable en lugar de la tradicional pintura de cal, puede causar que la mampostería se deteriore.

Para más información sobre preservación del patrimonio urbano, vea el Informe Especial en la edición mayo-junio 1999 de BIDAmérica.

CREDITOS RECIENTES

LAS SIGUIENTES OPERACIONES FUERON aprobadas recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus afiliadas, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones.

Argentina

Un préstamo de 140 millones de dólares del BID para apoyar la modernización de pequeñas y medianas empresas mediante el uso de innovaciones tecnológicas.

Un préstamo de 10 millones de dólares de la CII y un préstamo sindicado de 20 millones de dólares para el Banco Río de la Plata, S.A. para proveer financiamiento a mediano plazo para pequeñas y medianas empresas.

Una inversión de 6 millones de dólares del Fomin para el Fondo de Capital de Riesgo para la Pequeña Empresa de Argentina para proveer capital y cuasi-capital para apoyar a pequeños negocios.

Un préstamo de 5 millones de dólares del BID para respaldar el proceso de formular y fortalecer la política de comercio exterior.

Belice

Un aporte de 1,05 millones de dólares del Fomin para ayudar al gobierno a reformar los puertos del país.

Bolivia

Una línea de crédito de 2 millones de dólares del Fomin y un aporte de cooperación técnica del Fomin por 250.000 dólares para ayudar a desarrollar el sector de microfinanzas.

Brasil

Un préstamo de 62,5 millones de dólares del BID para ayudar a preservar sitios urbanos históricos y culturales, mejorar su administración y desarrollar prioridades y una estrategia de conservación. (vea nota previa).

Un préstamo de 10 millones de dólares del capital ordinario del BID y un préstamo sindicado por 10 millones de dólares para expandir y mejorar el cobro de peaje en una autovía en Río de Janeiro operada por la concesionaria Linha Amarela, S.A.

Un préstamo de 5 millones de dólares del BID para apoyar el proceso de formulación y fortalecimiento de la política de comercio exterior.

Un aporte de 898.950 dólares del Fondo Especial Japonés para respaldar la creación de servicios descentralizados de energía proveniente de fuentes renovables en comunidades aisladas.

Colombia

Un préstamo de 38,6 millones de dólares del BID para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, S.A.É.S.P. para apoyar los objetivos de la empresa municipal de agua de ser más eficiente operacionalmente y de autofinanciarse y mejorar la distribución de agua y los servicios de saneamiento del área metropolitana de Pereira.

Un préstamo de 36 millones de dólares del BID para iniciar un proceso de reforma educativa que descentralizará la administración de escuelas, aumentará la eficiencia y la equidad social en la distribución de recursos y mejorará la calidad de los servicios educativos.

El Salvador

Un préstamo de 5.044.500 dólares del BID para ayudar a transformar la Corte de Cuentas en la Oficina del Contralor General de la República, con mejor administración y mejores servicios de información y auditoría.

Un préstamo de 3.436.000 dólares del BID para ayudar a la Asamblea Legislativa a ser más eficiente, efectiva y transparente por medio de cambios en los procedimientos, la administración y la tecnología de la información.

Guyana

Un aporte de 940.000 dólares del Fomin para fortalecer el sistema de derechos de propiedad del país.

Honduras

Un préstamo de 7 millones de dólares de la CII para el Banco La Capitalizadora Hondureña S.A. para apoyar a pequeñas y medianas empresas a través de un banco comercial sólido y de buena reputación con una trayectoria de préstamos para financiamiento de proyectos de esa naturaleza.

SEMINARIOS DEL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la principal fuente de financiamiento para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, este año espera aprobar unos 10 mil millones de dólares en préstamos para proyectos económicos y sociales. Miles de contratos son otorgados cada año a firmas de los 46 países miembros del BID para la adquisición de bienes y servicios para estos proyectos.

LOS SEMINARIOS DE NEGOCIOS DEL BID proveen toda la información que las firmas necesitan para empezar a explorar estas oportunidades.

EVENTOS

Medio Ambiente, agricultura, agua y saneamiento.
Febrero 8, 2000

Los temas incluyen el control de la contaminación y el manejo de desechos, el desarrollo sostenible y el ecoturismo, los sistemas de información geográfica, los títulos de propiedad de la tierra, los servicios de apoyo a la agricultura, la conservación de costas, la administración de cuencas, el agua potable y los servicios de saneamiento, los programas de respuesta a emergencias por desastres naturales, el fortalecimiento institucional, los estudios evaluación de impacto, las actividades y estudios relativos a mitigar y proveer alivio en casos de desastres.

Reconstrucción y Transformación de América Central

Abril (la fecha precisa será anunciada próximamente)

La agenda incluye las estrategias para América Central, la presentación de proyectos sobre transporte, desarrollo urbano, agricultura, medio ambiente, servicios de agua y de saneamiento, modernización del estado, educación y salud; así como presentaciones sobre procedimientos de adquisiciones y consultoría.

Para obtener una lista completa de fechas y condiciones, visite la página de Internet del Banco: www.iadb.org, y busque bajo "briefings" después de haber hecho click en el botón "business opportunities". O contacte el Centro de Información Pública del BID, 1300 New York Avenue, N.W., Washington, D.C. 20577. Tel: (202) 623-1397. Fax: (202) 623-1403. Correo electrónico: business@iadb.org.

Jamaica

Un préstamo de 35 millones de dólares del BID para fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para financiar y administrar servicios básicos y mantener infraestructura.

Nicaragua

Un aporte de 982.456 dólares del Fomin para respaldar mecanismos alternativos para resolver disputas de propiedad.

Un aporte de 1,8 millones de dólares de la Agencia Noruega para la Cooperación para el Desarrollo para ayudar al gobierno a fortalecer el manejo de su política social.

Perú

Un aporte de 1,5 millones de dólares del Fomin para fortalecer las instituciones de ahorro y préstamo locales y municipales.

Un aporte de 1 millón de dólares del Fomin para fortalecer la regulación y la supervisión de cooperativas de crédito.

República Dominicana

Un préstamo de 71 millones de dólares del BID para ayudar a reformar los servicios de agua potable y de alcantarillado.

Mitch y la integración

REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO de Integración y Programas Regionales del BID concluyeron una misión de programación a América Central para sentar las bases para una acelerada recuperación económica e integración en el istmo.

La misión, encabezada por la gerente del departamento, Nohra Rey de Marulanda, y el director ejecutivo del BID por América Central, Edgar Guerra, se reunió con representantes de gobiernos, organizaciones regionales, grupos del sector privado y de la sociedad civil y el comité internacional de donantes.


Las misiones de programación son realizadas periódicamente para ayudar a definir la cartera de proyectos del BID. Esta misión permitió a los funcionarios definir tres áreas prioritarias para futuros proyectos en América Central: el crecimiento económico acelerado acompañado por una integración regional más profunda; la promoción del desarrollo humano y el respaldo al desarrollo ambiental sostenible y la prevención y mitigación de desastres naturales.

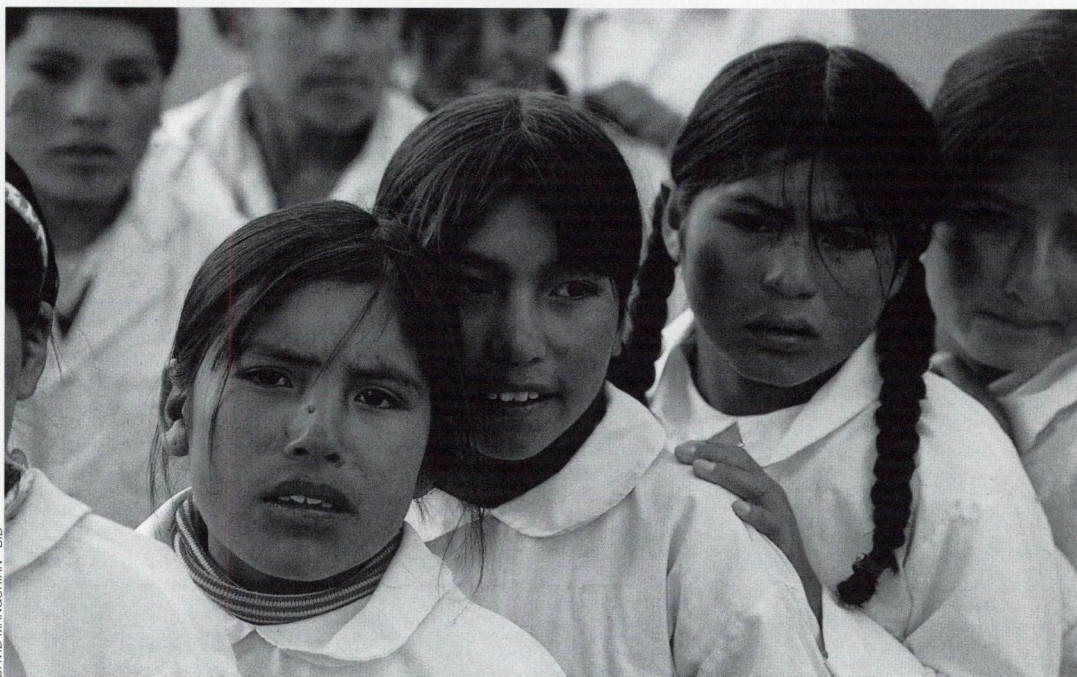
Estas prioridades se ajustan a la agenda establecida por el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central. Ese grupo, presidido por el BID, se reunió en Estocolmo para ofrecer compromisos de respaldo internacional para los programas de recuperación de los países centroamericanos tras el huracán Mitch (ver BID América julio-agosto 1999). La próxima reunión del Grupo Consultivo será en Madrid, a fines del año 2000.

Apoyo a las normas ISO

EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES del BID (Fomin) realizó en noviembre una conferencia sobre las normas de la International Organization for Standardization (ISO) para sistemas de administración, certificación y acreditación para pequeñas y medianas empresas.

La reunión celebrada en la sede del BID en Washington fue patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO).

 Para más información, vea la página web www.iadb.org



EN FILA: Alumnas de una escuela en la localidad boliviana de Huayllamarca forman fila para entrar a clases. Bajo un programa de reforma educativa respaldado por un préstamo de 80 millones de dólares del BID, Bolivia ampliará el acceso a la educación para los niños más pobres.



Sin olvidar sus raíces, Benedita Da Silva posa con niños en una favela de Río de Janeiro.

De la favela a los recintos del poder

Por ROGER HAMILTON

BENEDITA DA SILVA LLEGÓ AL MUNDO hace 57 años con tres factores en su contra: nació mujer, negra y pobre en Río de Janeiro. Esto ha sellado la suerte de muchos en las favelas, condenándolos a una vida de miseria, hambre, analfabetismo y desempleo.

Entonces, ¿cómo es que Benedita Da Silva llegó a ser vicegobernadora del estado de Río de Janeiro?

Su historia comienza en la favela Morro do Chapéu Mangueira, un barrio de viviendas precarias, surcado por zanjas de desagüe, y calles maltrechas. "Muy pronto sentí en la piel lo que era ser mujer, negra y pobre", recuerda Da Silva. Por fortuna tenía una familia que le brindó esperanza y amor. "Eso me dio la posibilidad de luchar, de tratar de que lo que le pasaba a mis amigos no me pasara a mí".

No fue una lucha fácil. "Choqué contra las barreras de las apariencias, según las cuales ser blanco es ser inteligente, que a su vez

significa no ser pobre. Hasta cuando una ha estudiado y conseguido las notas más altas, no se la considera brillante. Muy pronto me topé con los prejuicios y la discriminación".

Semejantes adversidades empujarían a mucha gente a rendirse, pero para Benedita Da Silva, esos mismos problemas le abrieron un sinnúmero de oportunidades para ayudar a otros. Aprendió a leer y escribir, después se incorporó a una escuela comunitaria para enseñar a niños y adultos. Adalid de los derechos de la mujer, fundó una asociación femenina en su favela y después un departamento de asuntos de la mujer en la federación estatal de asociaciones de favelas. Entretanto, trabajó como asistente de enfermería y estudió ciencias sociales.

Benedita Da Silva, quien se describe a sí misma como una "intensa militante", decidió aspirar a un cargo electivo en su ciudad. En 1982 fue electa concejal por el Partido de los Trabajadores, el cuál había llegado a liderar. En 1986 fue electa diputada nacional. En el Congreso defendió los derechos de los negros, indígenas y otras minorías y

buscó incorporar a la Constitución cláusulas referentes a delitos con motivación racial, a la licencia por embarazo, la igualdad de salarios por igual trabajo y el derecho de las presas a cuidar sus hijos en la cárcel.

Reelecta en 1992, Da Silva se postuló a la alcaldía de Río de Janeiro, pero perdió en la segunda ronda de votación. En 1994 se convirtió en la primera mujer de raza negra en ser electa al Senado. Durante todo ese tiempo continuó viviendo en Chapéu Mangueira, donde recibió a visitantes como Jesse Jackson y Desmond Tutu.


Ayuda para jóvenes. Como vicegobernadora del estado de Río de Janeiro, Benedita Da Silva está a cargo de los programas para mejorar la situación de las personas a las que ha dedicado su vida: los pobres, los negros, los favelados. En su agenda hay 21 proyectos que ayudan a casi 150.000 jóvenes. Da Silva se siente especialmente orgullosa de uno conocido como Vida Nova, que permite a unos 1.500 jóvenes de 50 comunidades recibir capacitación laboral ganando un salario mínimo. Un modelo de cooperación intergubernamental, Vida Nova aprovecha la experiencia y los recursos de trece organismos de gobierno, al tiempo que brinda asistencia legal y médica.

Da Silva se ufana también de los progresos logrados en educación. El problema no era llevar a los niños a la escuela, sino asegurar que hubiera maestros. Con su apoyo, el estado ha contratado a 3.000 docentes adicionales. Servicio de comidas, atención médica y dental dan a los niños carenciados nuevos motivos para ir a la escuela.

El objetivo de estos programas, afirma, es acabar con la injusticia y dar a su pueblo la oportunidad de tener vidas productivas. "Hay gente que trabaja, que produce riqueza, que ayuda a otros a obtener ganancias", dice. "Pero si esta gente no tiene una vivienda decente, si no tienen agua corriente y alcantarillado, si ven niños muriendo por desnutrición, se vuelven contra la sociedad. Se dedican a robar, a asaltar, al narcotráfico. Un programa social que no reconoce esto se engaña a sí mismo".

Sin embargo, Da Silva no está a favor de las dádivas. "Las reparticiones públicas y las firmas privadas deben prestar mucha atención a lo que dicen las comunidades. No hay inversiones, dinero o proyectos que puedan producir buenos resultados a menos que la comunidad pueda tomar sus propias decisiones y elegir sus propios destinos".

"No se debe dar cosas a las comunidades como si cayeran del cielo", explica. "La gente debe obtener los medios para resolver sus problemas mediante su propio trabajo".

 Para más información sobre el programa Vida Nova, visite la página web www.vidanova.rj.gov.br.



MANOS A LA OBRA: Herramientas al hombro, un trabajador se dirige a una obra vial en la localidad hondureña de Corralitos. Bajo un programa financiado por el BID, se han mejorado 200 kilómetros de caminos rurales.

Inter-American Development Bank
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577